



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



TESIS:

**“LA VIABILIDAD DE IMPUTAR POR DESOBEDIENCIA A LA
AUTORIDAD FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN ANTE POSIBLE VIOLENCIA FAMILIAR”**

PRESENTADO POR:

Bach. Heidy Lizbeth Calderón Alvites

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESOR:

Dr. Ricardo Ponte Durango

LAMBAYEQUE, 2019

Tesis denominada “La viabilidad de imputar por desobediencia a la autoridad frente al incumplimiento de las medidas de protección ante posible violencia familiar”, presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, por:

.....
Bach. Heidy Lizbeth Calderón Alvites
BACHILLER

.....
Dr. Ricardo Ponte Durango
ASESOR

APROBADO POR:

.....
Abog. Carlos Martínez Oblitas
PRESIDENTE

.....
Dr. Humberto falla Lamadrid
SECRETARIO

.....
Mag. Amador Mondoñedo Valle
VOCAL

DEDICATORIA

A Dios, quien como guía estuvo presente en el caminar de mi vida, el haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional, bendiciéndome y dándome fuerzas para continuar con mis metas trazadas sin desfallecer.

A mi madre y mi padre, porque son el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño, su apoyo incondicional, confianza, e impulsarme a seguir creciendo en el ámbito personal y profesional.

A mi hermano, que siempre está conmigo dispuesto a escucharme, ayudarme y motivándome a realizar mis metas, quien ha puesto toda su confianza para lograr un objetivo más en mi vida.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi asesor de tesis el Dr. Ricardo Ponte Durango, quien con su experiencia, conocimiento y motivación me orientó en la presente investigación.

Y a todas aquellas personas que de una u otra manera me ayudaron, brindándome su tiempo, sus consejos, opiniones y todo el apoyo para así realizar la presente investigación.

INDICE

DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO.....	4
INDICE	5
RESUMEN.....	8
ABSTRACT	9
INTRODUCCION	10
CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	13
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	13
1.1.1. Planteamiento del problema.	13
1.1.2. Formulación del problema.	15
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....	15
1.2.1. Justificación del estudio.	15
1.2.2. Importancia del estudio.....	16
1.3. OBJETIVOS.	16
1.3.1. Objetivo General.....	16
1.3.2. Objetivos Específicos.	17
1.4. HIPÓTESIS.....	17
1.5. VARIABLES.....	17
1.5.1. Variable independiente.	17
1.5.2. Variable dependiente.....	18
1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	18
1.6.1. Métodos	18
1.6.2. Técnicas	19
1.6.3. Instrumentos	20
1.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS	20
1.7.1. Presentación de Datos.....	20
1.7.2. Procesamiento de Datos	21
CAPITULO II	22
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN PREVISIÓN DEL DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	22

2.1.	ORIGEN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	24
2.2.	DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	25
2.3.	OBJETO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	26
2.4.	FINALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	27
2.5.	TUTELA PREVENTIVA URGENTE.....	27
2.6.	PRESUPUESTO PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. .	29
2.7.	LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN A LA REPARACIÓN POR EL DAÑO.....	29
2.8.	LA ORDEN DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	31
2.8.1.	Regulación	31
2.8.2.	Contenido.	33
2.9.	CRÍTICA SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LOS PROBLEMAS PROCESALES EN LA LEY N° 30364.....	34
2.9.1.	La violencia y sus razones de género contra las mujeres	34
2.9.2.	Inclusión de enfoques diversos de protección de derechos humanos	38
2.9.3.	Respecto a la celeridad y las garantías de tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar	41
2.9.4.	Respecto a la garantía del debido proceso frente al otorgamiento de las medidas de protección.....	43
CAPITULO III.....		49
EL DELITO DE RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.		49
3.1.	EL DELITO DE RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.....	49
3.2.	EL CONCEPTO DE LA CONDUCTA DE DESOBEDIENCIA.....	51
3.3.	BIEN JURÍDICO.....	51
3.4.	CONSUMACIÓN	52
CAPITULO IV.....		57
4.1.	LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN PENAL EN LA DOCTRINA	57
4.2.	EL CONCEPTO DE IMPUTACIÓN EN LA DOGMÁTICA ACTUAL	58
4.3.	LA INFLUENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO PENAL SOBRE LA IMPUTACIÓN DEL DELITO.....	59
4.3.1.	LA MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL COMO PRINCIPIO QUE LIMITA LA IMPUTACIÓN EN EL DERECHO PENAL.....	60
4.3.2.	EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD.....	64
4.3.3.	EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.	66
CAPÍTULO V		71
ANÁLISIS Y RESULTADOS.....		71
5.1.	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:.....	71
5.1.1.	Resultados del análisis estadístico.	71

5.1.2. Resultados del análisis jurisdiccional sobre la aplicación de medidas de protección.	72
5.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.....	79
CAPÍTULO VI.....	86
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	86
6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	86
6.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Explicar la justificación jurídica de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar”.....	86
6.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el Delito de resistencia o desobediencia a la autoridad”.....	88
6.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Describir doctrinariamente la teoría de la imputación penal y su relación con los principios rectores del derecho penal”.....	90
6.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Determinar si existe la posibilidad de imputar por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, antes de establecerse el delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar a nivel fiscal”.....	91
6.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES	96
6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS.....	99
CONCLUSIONES	101
RECOMENDACIONES	102
Bibliografía	103

RESUMEN

La presente investigación aborda la problemática que surge en razón de la incorporación del incumplimiento de las medidas de protección dictadas en el contexto de la violencia familiar contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, como delito de resistencia y desobediencia a la autoridad; puesto que su aplicación supone el apoyo a la lucha contra dicho flagelo; sin embargo en la realidad se ha incrementado notablemente, el gobierno está en una lucha constante para combatirla y erradicarla, es por ello que se promulgó la Ley N° 30364: “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, donde el legislador ha creado propuestas para garantizar el bienestar de las víctimas, siendo una de ellas las medidas de protección que son dictadas por el Juez de Familia. Con el afán de lograr eficacia, se está tomando como injusto penal al incumplimiento de una medida de protección, para que esta persona reciba la imposición de una sanción, contenida en el artículo 368° del código penal, con la finalidad de reducir los altos índices de violencia. Para poder dar solución a este problema es necesario acaso penalizar todo tipo de conducta o podemos optar por revisar la justificación jurídica y en razón de ello establecer la posibilidad de una regulación más equilibrada y proporcional.

Palabras Claves: Resistencia o desobediencia a la autoridad, medidas de protección, Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar

ABSTRACT

The present investigation addresses the problems that arise due to the incorporation of noncompliance with protection measures dictated in the context of family violence against women and members of the family group, as a crime of resistance and disobedience to authority; since its application supposes the support to the fight against this scourge; However, in reality it has increased significantly, the government is in a constant struggle to fight and eradicate it, which is why Law N ° 30364 was promulgated: "Law to Prevent, Punish and Eradicate Violence against Women and Members of the Family Group ", where the legislator has created proposals to guarantee the welfare of the victims, one of them being the protection measures that are dictated by the Family Court Judge. With the aim of achieving effectiveness, it is taking as unjust criminal the breach of a protection measure, so that this person receives the imposition of a penalty, contained in Article 368 of the criminal code, in order to reduce the high rates of violence. In order to solve this problem it is necessary to penalize all types of behavior or we can choose to review the legal justification and, therefore, establish the possibility of a more balanced and proportional regulation.

Keywords: Resistance or disobedience to the authority, protection measures, aggressions against women or members of the family group.

INTRODUCCION

El interés de la presente investigación ha despertado en razón del incremento de los casos de violencia producido progresivamente y pese a que el Estado intenta combatir y erradicar este mal no lo ha logrado, la actual Ley N° 30364 en el afán de lograr disminuir los actos de violencia contra la mujer e integrantes de un grupo familiar, ha puesto en marcha la vigencia de las medidas de protección y medidas cautelares, con las que se pretende que la víctima tenga una protección ante los posibles o reiterados actos de violencia.

Normativamente el incumplimiento de las medidas de protección calificado como resistencia o desobediencia a la autoridad nace con la misma “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, puesto que en su artículo 24° así lo menciona. Por ello cobra importancia esta investigación pues se analizará tal delito, con el fin de verificar si resulta viable sancionar a una persona por el incumplimiento de una medida de protección.

En ese sentido es que se proyecta como formulación del problema la interrogante: ¿Cuán viable resulta la imputación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad a nivel fiscal, ante el incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar?

Tal cuestionamiento se ha resuelto inicialmente con el conocimiento básico previo a la investigación lo cual llevó a la construcción de la siguiente hipótesis: Si, resulta viable la imputación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad a nivel fiscal ante el incumplimiento de las medidas de protección; entonces, se estará logrando el fin de previsión de las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

Aseveración que tuvo que ser comprobada con el desarrollo de la investigación a través de la recopilación de contenidos teóricos y de la observación en la realidad jurídica, por lo cual se trazaron metas que se aprecian en cada uno de los objetivos específicos que han desencadenado el desarrollo de los capítulos que a continuación se describen.

El Capítulo I, se ocupa del desarrollo metodológico en el cual se recogen las pautas técnicas sobre las que se estructuran los contenidos de la investigación, contemplando el orden lógico que orientará la demostración de la hipótesis inicial.

Seguidamente el Capítulo II, desarrolla las medidas de protección en previsión del delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, describiendo tanto su estructura cuanto los factores que provocarían su ineficacia en la aplicación de las medidas de protección otorgadas ante esta circunstancia delictiva.

Luego en el Capítulo III, se describe doctrinaria y normativamente la justificación y estructura respectivamente del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad con la intención de reconocer sus alcances objetivos para la calificación de hechos que incumplan con tal regla, resultados que permitirán reconocer la viabilidad del incremento de su acción sobre el incumplimiento de las medidas de protección en el caso de violencia familiar.

Siendo importante también el reconocimiento de la participación de la teoría de la imputación necesaria, es que en el Capítulo IV se configura la estructura doctrinaria que permite seguir las reglas para la calificación de ciertas acciones a fin de identificarlas como ilícitos pasibles de sanción.

Ya en el Capítulo V, se recopila la información obtenida del análisis de la realidad jurídica que circunda las figuras jurídicas de las medidas de protección y resistencia o desobediencia a la autoridad, con el fin de evaluar los datos y trasladar esta

información para permitir la contrastación de la hipótesis que se desarrolla en el Capítulo VI, compuesto por la discusión de cada uno de los objetivos específicos y finalmente la validación de cada una de las variables que permitieron construir la hipótesis final.

La comparación de las dos hipótesis ha facilitado la dotación del carácter científico de la investigación puesto que las conclusiones y recomendaciones que se derivan de tal comparación permiten establecer un panorama más claro respecto a la viabilidad de la imputación del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad sobre la acción del incumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia familiar; estructura que se pone al juicio evaluador del jurado de la presente investigación.

La Autora.

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS.

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

1.1.1. Planteamiento del problema.

Hoy en día ha surgido el fenómeno denominado violencia familiar, cuyo tema trae consigo diferentes efectos, tanto jurídicos como sociales; nuestra Constitución Política, nos menciona que la familia es el núcleo de la sociedad, siendo así el Estado asume el rol de protector frente a la violencia ejercida contra las mujeres y contra el grupo familiar; problemática que constituye un mal presente en la sociedad sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, religión, sistema político o económico; en virtud a ello el gobierno está en una lucha constante para combatir y erradicar la violencia familiar, ello se evidencia claramente en las reiteradas modificaciones que ha tenido la legislación sobre Violencia Familiar, siendo la última la N° 30364: “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar” y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, publicado el 27 de julio del 2016, con lo que se puede verificar un sin fin de modificatorias que tuvieron como única finalidad uniformizar el proceso de violencia familiar con el proceso penal, ya que en la mencionada ley el legislador ha creado propuestas para garantizar el bienestar de las víctimas, siendo una de ellas las medidas de protección que son dictadas por el Juez Especializado de Familia, y en donde también se señala que solo bastaría el incumplimiento de la medida de protección, para que se configure el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, situación que al modesto parecer de la investigadora la sanción aplicada en razón del tipo de resistencia o desobediencia a la autoridad no resultaría proporcional ya que generaría vulneración de ciertos derechos y principios del derecho penal, lo cual se analiza en la investigación.

Frente a estas consideraciones tendríamos que la seguridad jurídica corre peligro, en tanto que existen muchas medidas de protección mal concedidas, las cuales podrían ser utilizadas por los denunciantes con el único propósito de sacar ventaja ante un hecho nuevo de aparente violencia, posterior a la resolución que dictó la medida de protección, por lo que el interesado de manera lícita ya no necesitaría solicitar ante el Juez de Familia la variación de la medida de protección por un hecho nuevo, sino más bien se procedería con la denuncia por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Siendo así se aborda la realización de un análisis doctrinario y dogmático, en relación a los criterios para la imputación o atribución de responsabilidad penal, en cuanto a la comisión de un determinado delito, específicamente en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, en busca de determinar si es viable sancionar a quien incumpla una medida de protección, las cuales fueron dictadas por el Juez del Juzgado Especializado de Familia.

Debiendo considerar que la afectación legislativa está relacionada con la promulgación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, publicado el 23 de noviembre del 2015, en relación a su artículo 24° Incumplimiento de medida de protección, cuyos tenores literales son los siguientes: “el que desobedece e incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originario por hechos que configure actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes de grupo familiar, comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el código penal”; del cual se desprende una duda generada en cuanto al objeto de protección del artículo 368 del código penal, ya que su único fin es la “la orden legalmente impartida”, no teniendo como objeto las medidas de protección, máxime aun ante la existencia de procesos paralelos en del Ministerio público sobre un mismo caso de violencia familiar, esto es, el que investiga la violencia para su imputación y otra investigación que busca encontrar razón para formalizar denuncia

por resistencia o desobediencia por incumplimiento de medidas de protección dictadas en el proceso originario(Juzgados Especializados de familia).

Por ello la presente investigación se ocupa de verificar puntualmente los aspectos jurídicos que rodean a cada uno de los tipos y las circunstancias que promueven su análisis rumbo a la imputación, con el fin de verificar si corresponde el reproche o constituye vulneración a los principios del Derecho Penal.

En este contexto la tesis busca determinar si es viable imputar el delito de desobediencia ante el incumplimiento de una medida de protección, observando la realidad con el fin de establecer una propuesta que va enfocada a una adecuación del artículo 368 del Código Penal, que permita dar una solución de un mandato, sin vulnerar derechos para así estar dentro de la justicia igualitaria con el respeto de los principios del derecho Penal.

1.1.2. Formulación del problema.

¿Cuán viable resulta la imputación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad a nivel fiscal, ante el incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar?

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

1.2.1. Justificación del estudio.

Se ha encontrado justificada la presente investigación desde el punto de vista jurídico social, en el sentido que los casos de violencia han ido incrementándose progresivamente y pese a que el Estado intenta combatir y erradicar este mal no lo ha logrado, la actual Ley N° 30364 en el afán de lograr disminuir los actos de violencia contra la mujer e integrantes de un grupo familiar, ha puesto en marcha la vigencia de las medidas de protección y medidas cautelares, con las que se pretende que la víctima tenga una protección ante los posibles o reiterados actos de violencia.

Básicamente nos enfocaremos con respeto al incumplimiento de las medidas de protección, y para ello nos remitiremos al artículo 24° de la “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, cuyos tenores literales son los siguientes:

El que desobedece e incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originario por hechos que configure actos de violencia contra las mujeres o contra integrantes de grupo familiar, comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal (Ley N° 30364, 2015).

1.2.2. Importancia del estudio.

La investigación a desarrollar resulta de gran importancia, porque trataremos de analizar el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, con el fin de verificar si resulta viable sancionar a una persona por el incumplimiento de una medida de protección.

Relevancia que adquiere dada la proyección del resultado, que permitirá proponer quizá como solución la idea de reestructurar la regla que incorpora al incumplimiento de las medidas de protección en violencia familiar dentro del artículo 368 del Código Penal, a fin de que el resultado de la imputación sea lo suficientemente proporcional al daño causado, permitiendo de ese modo establecer una sanción más equitativa y asegurando el sentido garantista del proceso penal.

1.3. OBJETIVOS.

1.3.1. Objetivo General.

- Determinar si es posible la imputación por el delito de resistencia o

desobediencia a la autoridad a nivel fiscal, ante el incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar.

1.3.2. Objetivos Específicos.

- Explicar la justificación jurídica de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar.
- Analizar el Delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
- Describir doctrinariamente la teoría de la imputación penal y su relación con los principios rectores del derecho penal.
- Determinar si existe la posibilidad de imputar por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, antes de establecerse el delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar a nivel fiscal.

1.4. HIPÓTESIS.

Si, resulta viable la imputación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad a nivel fiscal ante el incumplimiento de las medidas de protección; entonces, se estará logrando el fin de previsión de las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

1.5. VARIABLES.

1.5.1. Variable independiente.

- La imputación por desobediencia a la autoridad

1.5.2. Variable dependiente.

- El incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar.

1.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

1.6.1. Métodos

En nuestra investigación se usaron de los siguientes métodos, que permitieron desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos:

- ✓ **Método exegético jurídico.-** Este método fue aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto a la violencia familiar, específicamente a las medidas de protección a fin de verificar su eficacia; detalle que se confronta con la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.
- ✓ **Método sistemático jurídico.-** Este método fue empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico peruano, lo cual permitió arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.
- ✓ **Método hipotético deductivo.-** Al emplear el método hipotético deductivo se pudo verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su

naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

- ✓ **Método inductivo.-** La aplicación de este método permitió analizar el material de estudio, el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales.

1.6.2. Técnicas

En el desarrollo de nuestro tema, se usaron las técnicas de recolección de la información que permitió establecer los parámetros con los que se definirá nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los resultados.

- ✓ **Análisis Documental.-** Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de investigación documental, fichas bibliográficas, etc., con lo cual se obtuvieron datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho de Familia, específicamente respecto a la prevención de la violencia familiar a través de las medidas de protección y el tratamiento ante su incumplimiento.
- ✓ **Observación.-** Se utilizó la guía de observación, con la cual se observó la realidad socio jurídica que engloba el tratamiento penal de la conducta que refleja el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas en sede judicial.
- ✓ **Entrevista.-** Se empleó la guía de entrevista; la cual fue aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son Fiscales, Jueces y especialistas, quienes verterán sus opiniones respecto de la problemática sobre la tipificación

del delito resistencia y desobediencia a la autoridad respecto del incumplimiento de las medidas de protección otorgada en un proceso de violencia familiar.

1.6.3. Instrumentos

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

- ✓ **La Ficha.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y sirvió para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se fueron obteniendo durante la investigación.
- ✓ **La Guía de Observación.-** Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y sirvió para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación.
- ✓ **La Guía de Entrevista.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la entrevista, y consistió en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener con los entrevistados que son los conocedores del tema.

1.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS

La labor en esta sección consistió en describir cómo ha sido analizada estadísticamente la información.

1.7.1. Presentación de Datos

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera:

- a. Los datos cualitativos, fueron presentados en fichas.
- b. Los datos cuantitativos, fueron presentados en cuadros y gráficos.

1.7.2. Procesamiento de Datos

- a. **Crítica y discriminación de datos;** los datos obtenidos y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, fueron evaluados por el investigador, que sirvieron para saber si se encuentran completos, si han sido correctamente obtenidos y si son auténticos, de tal manera que solamente nos quedaremos con aquellos datos que son confiables, mientras que no lo son, serán descartados.
- b. **Tabulación de datos;** a los datos que hayan pasado el procedimiento de crítica y discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, se les asignó un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual se hizo teniendo en cuenta el esquema de investigación que se anexa al final del presente proyecto de investigación.
- c. **Tratamiento de datos:** Los datos tabulados, serán ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente.

CAPITULO II

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN PREVISIÓN DEL DELITO DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.

Si bien es cierto uno de los ejes temáticos de la proyección está referido a las medidas de protección, se ha considerado preciso y prudente recoger unas referencias de la definición de la violencia familiar, pues precisamente las medidas de protección se han creado con el fin de prevenir esta figura jurídica.

En efecto debe ocupar el interés de nuestro enfoque, la búsqueda de una definición de violencia familiar, así diremos En un sentido amplio, se entiende por violencia: la acción o efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de proceder.

En ese sentido es apropiado recurrir a la búsqueda de una definición, así encontramos en el diccionario de la RAE lo siguiente: “Fuerza extrema, o abuso de la fuerza. Fuerza ejercida sobre una persona para obligarla a hacer lo que no quiere. El que obra con ímpetu y fuerza; se deja llevar fácilmente por la ira” (Diccionarios: De la Lengua Española, 2012). Pues bien, si de lo que se habla, es un tipo de fuerza ejercida de una perspectiva del abuso, entonces diremos que tiene un inicio connotativo subjetivo, que es desencadenado por la ira básicamente; entonces en el ámbito familiar como es que se configura, tomaremos la referencia de Corsi (2004), quien describe la violencia familiar del siguiente modo:

El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, entendida como la forma de interacción enmarcada en el contexto de desequilibrio de poder, siendo los dos ejes de desequilibrio de dicho poder dentro de la familia el género y la edad. Además, es necesario subrayar que, para poder definir una situación familiar como un caso

de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica; por lo tanto, no están incluidas en la definición las situaciones de maltrato aislado, que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares (CORSI, 2004).

El autor citado nos habla de una connotación familiar revestida de la característica de frecuencia, esto es, no la comprende como hechos aislados que surgen de una posible discusión simple, sino de actos constantes que terminan causando perjuicio a la estructura familiar.

Pues bien, ya estamos ubicados en el medio familiar y descrita ya la definición conceptual, nos corresponde buscar el detalle de lo que podría significar una suerte de clasificación o puntualización de las formas en que podría generarse este tipo de violencia, por ello tomamos lo plasmado por Ayvar Roldan (2007), al definir a la violencia familiar de la siguiente manera:

La violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar y que causan daño físico y psicológico y vulnera la libertad de la otra persona; y una de sus características es su cronocidad (Ayvar Roldan, 2007).

En esta última cita notamos la descripción acumulada de las formas en que puede vulnerarse los principales aspectos de la personalidad como son el físico, psicológico y la libertad de una persona comprendida en el entorno familiar, haciendo notar nuevamente que se requiere de la característica de reiteración.

2.1. ORIGEN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A) La injunction anglosajona:

Se considera que un antecedente de las medidas de protección concedidas en los procesos de violencia familiar la encontramos en la “injunction” anglosajona, institución comentada por el profesor Fernando Trzegnies.

El mencionado profesor, nos ilustra señalando que dicha institución nace hacia el siglo XIV en Inglaterra y eran órdenes de la corte para que se haga algo o para que no se haga algo. El autor refiere que: “(...) no solamente se dirigen a impedir una actividad en proceso de ejecución, sino que también pueden ser solicitadas *quiat timet*, es decir, para impedir que se lleve a cabo una actividad futura que razonablemente se teme que pueda dar origen a un daño... la “injunction” es una medida de carácter discrecional y, por consiguiente, el que la solicita tiene que justificar de manera convincente su necesidad. Puede plantearse de dos modalidades: la interlocutoria, que rige mientras dure el juicio; y la perpetua, que tiene efecto sin límite de tiempo. En el primer caso, se trata de una medida preventiva destinada a que no se produzca el daño o a que no se agrave, mientras se ventila un juicio. En el segundo caso es una medida definitiva por la que se prohíbe al demandado, como parte de la sentencia, que continúe con la actividad generadora de daño o se le ordena que adopte ciertas precauciones como condición *sine qua non* para realizar la actividad cuestionada (...) (Pariasca Martínez, 2016, págs. 94-95).

B) Tutela preventiva urgente

Vista la “injunction” como antecedente de la media de protección, considero que dichas medidas forman parte de lo que se conoce en

la ciencia procesal como tutela preventiva. Así, siguiendo al profesor y magistrado hurtado reyes, la idea de la tutela preventiva, es evitar que el daño no se produzca o evitar la repetición del daño:” (...) esto es, que la actividad de los jueces en vez de recomponer un conflicto, lo prevenga, asimismo evitar la repetición de la lesión de derechos (...) (Hurtado Reyes, 2006, pág. 129).

Las medidas de protección, similares a las reguladas por la legislación argentina (ley N° 24.417), tiene como finalidad actuar antes que un daño se concrete, evitando que continúe la acción dañosa o evitando que se produzca, para lo cual el juez deberá imponer al demandado una obligación de hacer o de no hacer que deberá cumplirse.

2.2. DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Las medidas de protección entendidas como un mecanismo de protección que bajo la posición garantista del Derecho, busca asegurar el resguardo de quienes son víctimas de los actos violentistas antes definidos; sin embargo esta puntualización merece ser ampliada para un mejor entendimiento.

Bajo esta tarea se recurre a lo recogido por el investigador Castillo Aparicio (2015) en su libro *Medidas cautelares personales en violencia familiar*, en el cual toma la referencia de Alene Dias Pome, quien sobre las medidas de protección indica que:

Son aquellas actividades y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas situaciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su agresor (...) esas medidas de protección van más allá por cuánto buscan que la víctima se sienta tranquila y

que pueda gradualmente volver a su vida normal rehabilitándose de sus traumas (Castillo Aparicio, 2015).

César San Martín nos dice que las medidas tienen un propósito común: alejar al agresor, evitar perturbaciones, en suma, precaver nuevos atentados contra la víctima afectando derechos del imputado. Asimismo, el profesor César San Martín señala que la naturaleza de las medidas de protección no es cautelar pues no asegura el éxito del proceso o la ejecución de una eventual sentencia sino tutiva coercitivamente en razón de que mediante estas medidas se protege a los ofendidos por el presunto delito o falta a través de la imposición de determinadas prohibiciones al acusado (San Martín Castro, 2003, págs. 1171-1172).

Las medidas de protección son mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor, asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de la víctima. Dichas medidas son emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes los cuales son los Juzgados de Familia, los Juzgados Mixtos o en su defecto los Juzgados de Paz.

2.3. OBJETO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Es preciso señalar que debemos tener en cuenta que la incorporación de las medidas de protección al ordenamiento jurídico es sumamente importante, tomando la apreciación de investigador Castillo Aparicio (2015) en su libro *Medidas cautelares personales en violencia familiar*, el cual indica que:

Las medidas de protección tienen por objeto asegurar la integridad física psíquica, psicológica y sexual de la víctima, además el resguardo de sus bienes patrimoniales de ser el caso. Constituyen, por tanto, un mecanismo procesal destinado a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del

ejercicio de la violencia por parte del agresor (Castillo Aparicio, 2015, pág. 80).

2.4. FINALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

La finalidad de las medidas de protección es garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos y libertades de las presuntas víctimas, consagrado como derecho fundamental de la persona, es así que el artículo 2° inciso 1 de la constitución política establece que toda persona tiene derecho: “a la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. Asimismo, en el párrafo h) del inciso 24 del artículo 2° consagra que: “nadie debe ser víctima de violencia moral psíquica o física ni sometido a torturas o tratos inhumanos o humillantes”.

Cabe señalar que el establecido por la Convención Americana de los Derechos Humanos donde se dispone que su Artículo 63°,2 que: “en extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, (...) podrá tener medidas provisionales que consideren pertinentes (...)” (Humanos & Pacto de San Jose, 1978, pág. 18).

2.5. TUTELA PREVENTIVA URGENTE

Vista la “injunction” como antecedente de la media de protección, considero que dichas medidas forman parte de lo que se conoce en la ciencia procesal como tutela preventiva. Así, siguiendo al profesor y magistrado hurtado reyes, la idea de la tutela preventiva, es evitar que el daño no se produzca o evitar la repetición del daño:” (...) esto es, que la actividad de los jueces en vez de recomponer un conflicto, lo prevenga, asimismo evitar la repetición de la lesión de derechos (...). (Hurtado Reyes, 2006, pág. 129).

Las medidas de protección, similares a las reguladas por la legislación argentina (ley N° 24.417), tiene como finalidad actuar antes que un daño se concrete, evitando que continúe la acción dañosa o evitando que se produzca, para lo cual el juez deberá imponer al demandado una obligación de hacer o de no hacer que deberá cumplirse.

El profesor y magistrado Hurtado Reyes, nos informa entre otros aspectos, que la tutela ordinaria ha mostrado deficiencias para la solución de problemas que requieran de atención rápida. En los procesos de violencia familiar, estando a lo urgente del pedido, las decisiones, al menos de las medidas de protección, tienen que ser expedidas de forma inmediata. (Hurtado Reyes, 2006, págs. 93-94).

De este modo, se puede decir entonces que las medidas de protección colaboran de manera muy significativa con la política permanente del estado de lucha contra la violencia familiar, siendo esta tutela realmente efectiva y oportuna a favor de las víctimas, no pudiendo ser consideradas o confundidas con las medidas cautelares.

Sobre el particular, la distinguida Dra. María Elena Guerra Cerrón, señala que respecto a las medidas de protección: “(...) existían posturas doctrinarias respecto a la naturaleza de las mismas: si eran medidas cautelares o no, si tenían el carácter de medidas auto satisfactorias o no; sin embargo, esa disquisición ha concluido, porque hoy no cabe duda de que las medidas de protección-cuyo dictado corresponde al Juez de Familia-, tienen la naturaleza cautelar (...) (Guerra Cerron , 2006, pág. 185).

Las medidas de protección reguladas en la Ley N° 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, son una forma general de tutela de las personas, garantizando de este modo la integridad física, psicológica, moral y sexual de las personas

víctimas de violencia familiar, es decir, salvaguardando los derechos humanos de manera individual.

2.6. PRESUPUESTO PARA LA CONCESIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

A diferencia de las medidas cautelares y teniendo como base lo señalado por Joan Pico I Junoy (2010), se incorporan a continuación los presupuestos que según este autor sirven al juez, en su caso, para dictar las medidas de protección. Los presupuestos son:

- 1. Fuerte probabilidad:** que es la facultad de adoptar la medida de protección cuando exista un alto grado de certeza del mismo. De esta forma se justifica que el juez pueda dictar la medida de protección, como una inmediatez en la actuación.
- 2. Perjuicio irreparable:** este presupuesto se le conoce como el grado máximo de peligro en la demora. Significa de no adoptarse de manera inmediata la medida de protección se originará un daño en contra de la víctima, peligrando su integridad física psíquica y moral.
- 3. No caución:** “significa que estando a lo urgente del pedido y a su naturaleza, las medidas de protección no necesitan de caución” (pág. 34).

2.7. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN A LA REPARACIÓN POR EL DAÑO

Habiendo desarrollado la idea de las medidas de protección, también se debe relacionar ello con la reparación del daño que deviene de la responsabilidad Civil generada por el daño ocasionado, así tenemos a Trazegnies (2001) quien indica: “En la responsabilidad Civil extracontractual habitan un gran número de daños que tienen una forma continuada”. (Trazegnies Granda, 2001, págs. 375, 376). Esta no

es la excepción en la violencia Familiar. (Muchas veces los daños continúan cuando el agresor percibe que el monto a pagar por responsabilidad civil es una suma simbólica. Es justamente el incentivo perfecto para seguir dañando).

Así, se crea una especie de Círculo vicioso e ingresamos a lo que el profesor Fernando de Trazegnies llama “contrato hipotético”, por el que el causante tiene derecho a dañar a cambio del pago de una suma de dinero cuyo monto lo fija el Juez. Menciona el autor que un contrato así, sería ineficiente. Así, si no hay como impedir que el causante prosiga con la actividad dañina, estamos ante una situación similar a la del contrato forzado y que es inaceptable para el nuestro Derecho. (Trazegnies Granda, 2001, pág. 376).

Por otro lado, también existen casos en donde la víctima puede encontrarse en una situación de inminente daño y es necesario que el Estado le brinde protección.

El profesor Trazegnies (2001), afirma que:

(...) en los casos relativos al daño continuado o a la inminencia del daño: (...) hace falta un procedimiento que permita no solo cobrar una indemnización (si algún daño ya se produjo) sino además obtener la paralización del acto continuado o inminente que genera el daño (...). (pág. 377).

En relación a todo lo recogido hace falta tener una idea resumida de lo que actualmente se tiene como concepción de las medidas de protección, por ello tomamos la referencia de Pariasca (2016), quien señala:

(...). En definitiva, con dichas medidas se garantiza la integridad fiscal y/o psicológica de la víctima, pudiendo el juez, según las

circunstancias del caso dictar las medidas de protección que correspondan sin estar “atado” a una fórmula legal. Así, se deja a criterio del magistrado la medida más idónea que permite cumplir con la prevención del daño o riesgo (Pariasca Martínez, 2016, pág. 94).

2.8. LA ORDEN DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

2.8.1. Regulación

Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con respecto a la agresión misma y a su agresor; son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. (Díaz Pomé, 2009).

La orden de protección se configura de este modo sobre la base de seis principios básicos a los que responde su regulación.

- a) Principio de protección de la víctima y su familia.** La razón debe ser de la orden de protección reside en el objetivo fundamental de proteger la integridad de la víctima y de su familia frente al agresor. Dicho con otras palabras, el objetivo prioritario de la orden de protección es que la víctima y su familia recuperen la sensación de seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores del agresor. Por este motivo, en los supuestos de violencia de género al acceso a una orden de protección se constituye en un derecho de la víctima.

- b) **Principio de aplicación general (criterio de necesidad).** El juez debe poder utilizar la orden de protección siempre que la considere necesaria para asegurar la protección de la víctima.
- c) **Principio de accesibilidad.** La eficaz regulación de la orden de protección exige la articulación de un procedimiento lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todas las víctimas de delitos de violencia de género. Así pues, la solicitud de la orden debe adaptarse a criterios de su sencillez, de tal modo que la víctima o sus representantes, puedan acceder fácilmente al juez para solicitarla, sin costes añadidos.
- d) **Principio de urgencia.** La orden de protección debe, sin menoscabo de las debidas garantías procesales ni del principio de proporcionalidad, obtenerse y ejecutarse con la mayor celeridad posible. Debe pues articularse un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la verificación judicial de las circunstancias del hecho y las consiguientes medidas de protección de la víctima.
- e) **Principio de integralidad.** La concesión de la orden de protección por el juez debe provocar, de una sola vez y de manera automática, la obtención de un estatuto integral de protección para la víctima, el cual active una acción de tutela que concentre medidas de naturaleza penal, civil y de protección social.
- f) **Principio de utilidad procesal.** La orden de protección debe facilitar, además, la acción de la Policía Judicial y el consiguiente proceso de instrucción criminal, principalmente en lo referente a la recogida, tratamiento y conservación de pruebas.

Conviene destacar dos elementos: en primer lugar, cada orden de protección está ligada a un concreto proceso penal; y, por otra parte, solamente puede existir una única orden de protección que afecte a cada víctima, es decir, no pueden

concurrir varias órdenes de protección que desplieguen sus efectos sobre una misma persona. Cuando se alteren las circunstancias, el contenido de la orden de protección podrá ser modificado por parte de la autoridad judicial, sobre todo en aquellos casos en los que se incrementa la situación de peligro para la víctima, pero no podrá dictarse una ulterior orden de protección que contradiga los términos de la ya dictada.

2.8.2. Contenido.

Respecto a su contenido, las medidas a adoptar pueden ser principalmente de carácter penal y/o civil.

Con la adopción de alguna de las medidas penales se pretende evitar que el agresor pueda acercarse en el futuro a la víctima y cometer nuevas agresiones, es decir, su objetivo es lograr la seguridad de la víctima. Podrán consistir en cualquiera de las previstas en la legislación procesal criminal, esto es:

- a. Privativas de libertad (prisión provisional, detención).
- b. Orden de alejamiento.
- c. Prohibición de comunicación con la víctima.
- d. Prohibición de volver al lugar del delito o residencia de la víctima.
- e. Suspensión del derecho al porte, tenencia u uso de armas.

Las medidas de carácter civil posibilitan que la víctima obtenga inmediatamente seguridad jurídica. A diferencia de las medidas penales, que pueden ser solicitadas, además de por la víctima y el ministerio fiscal, por cualquier persona que tenga con la víctima alguna de las relaciones, e incluso de oficio por el juez, estas medidas deben ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores de edad o incapaces. Esto es, sólo pueden adoptarse a instancia de parte. Podrán consistir en:

- a. Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar.

- b. Suspensión del régimen de visitas.
- c. Suspensión cautelar de la patria potestad o custodia de los menores.
- d. Régimen de comunicación y estancia con los hijos.
- e. Fijación de un régimen de prestación de alimentos.
- f. Cualquier medida de protección al menor que se considere oportuna para apartarle de un peligro o evitarle perjuicios.

2.9. CRÍTICA SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LOS PROBLEMAS PROCESALES EN LA LEY N° 30364.

2.9.1. La violencia y sus razones de género contra las mujeres

Se puede ubicar en la ley bajo crítica, en su artículo quinto un acercamiento al concepto de violencia contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”.

Se presume que esta percepción se agregó en base a los comentarios ácidos y de origen mediático respecto a la anterior Ley de Violencia Familiar en la que se contemplaba sólo aquellos actos violentistas cometidos únicamente por personas vinculadas familiarmente a la víctima (cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientas colaterales hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar sin relación laboral o contractual, quienes hayan procreado hijos).

Significa ello pues que existe el reconocimiento de que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico, se puede presumir que es decir, se da por razones de género, por la ocasión de su ocurrencia bajo el contexto público, fuera del contexto del hogar y, además, obedeciendo desde luego a un efecto social que se orienta en base a las desigualdades estructurales sociales hacia las mujeres.

El autor peruano Víctor García Toma (2013) nos da una definición de “la igualdad en la elaboración de la ley” en su libro titulado *Los Derecho Fundamentales* en lo siguiente:

Ello se refiere a la exigencia de contenidos normativos generales y abstractos; vale decir, preceptivamente impersonal e indeterminada en relación con sus destinatarios, así como una proposición en términos de un supuesto que apunta a un debe ser, en el que queda encuadrada cualquier citación que pudiera darse en la realidad (pág. 175).

Entendida entonces a la discrecionalidad de los jueces como el operador que limitara e impedirá al operar jurídico, cuando al verse impedidos de realizar prácticas desde su perspectiva personal, cuando los hechos no tengan la relevancia jurídica necesaria, es la norma constitucional la que se convierte en el guía el cual va señalando el camino.

Con la actual constitución peruana de 1993 el derecho a la igualdad queda conformado como un derecho fundamental, en el artículo 2 del inciso 2 de la carta magna, estableciéndose la igualdad formal en sentido amplio, dando espacio a la igualdad material en su lucha por las desigualdades, dejándose pliego abierto para las políticas públicas sin esclarecer las obligaciones como estado, si bien es cierto, se establece en el artículo 44¹ de la constitución cuando se dice que el deber del Estado es “garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos” (Constitución Política del Perú (CP), 1993, pág. 25. Art. 44°). La responsabilidad de un trato

¹ Artículo 44: Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

igualitario en base a la vigencia de los derechos humanos rece en los Estados, toda vez, que son ellos quienes deberán actuar de acuerdo a las normas constitucionales que representan la voz de sus ciudadanos materializadas.

Entendemos que el derecho a la igualdad implica que el Estado debe dar un trato igualitario a todas las personas; de esta manera, todo trato diferente tiene que estar prohibido. Tal como señala el autor Huerta (2013) en lo siguiente:

La realidad demuestra que existen una serie de desigualdades en la sociedad, lo que obliga a adoptar medidas orientadas a lograr que el derecho a la igualdad no se agote en su reconocimiento formal (igualdad formal), sino que existan iguales oportunidades para el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todas las personas (igualdad material). Estas medidas pueden implicar un trato desigual, lo que no es considerado como una discriminación sino una diferenciación (pág. 308).

Las aplicaciones de estas medidas están vinculadas con la defensa de grupos vulnerables surgidos a raíz de las desigualdades sociales, sin embargo cabe la duda de saber si estas acciones responden a una realidad exacta evidenciada en base a un estudio adecuado, o sólo son el efecto de la acción mediática. La diferencia doctrinaria del derecho a la igualdad, nos ayudara a distinguir cuando uno de los tratos discriminatorios se aparta de la realidad, en el caso de las mujeres corresponderá acaso hacer una diferenciación especial, surgiendo luego la pregunta ¿Qué parte del ordenamiento se habrá destinado para proteger al hombre por su condición de tal?, un tema que puede generar arduo debate.

Sin duda alguna que los reconocimientos que hace la nueva ley han sido ejecutados o positivados gracias a la lucha constante por la búsqueda de igualdad de oportunidad para el ejercicio de los derechos humanos que hoy podemos estar debatiendo y llegan a acuerdos en las políticas públicas implementadas por cada

Estado, pidiéndose ser incluidos a los grupos más vulnerables como es el caso de los hogares buscando proteger a sus miembros, pero será necesario agregar una percepción de género en la ley, bajo el temor de estar aplicando una diferenciación con discriminación.

Otro de los aspectos que llama la atención respecto a la concepción de género son las dificultades que pueden evidenciarse a nivel internacional respecto a la forma en que se ha conseguido el equilibrio social con la inserción de esta percepción en función a la distinción de sexos, así lo indica Toledo (2014), en su libro titulado *Femicidio/Feminicidio*, en el cual vierte una percepción de este modo:

(...) las figuras genéricas específicas generan plantean también un problema importante de construcción típica que hasta ahora ninguna legislación ha conseguido resolver de manera convincente. Me refiero a cómo definir en la ley penal los comportamientos constitutivos de violencia de género en términos que resulten aceptables para cumplir con las estrictas exigencias del principio de legalidad (pág. 197).

Si, la repercusión de una inadecuada percepción por parte del legislador trae como consecuencia la alteración o falta de coincidencia con el principio de legalidad, resulta ser un problema mucho más álgido de lo que se puede suponer, por lo mismo que se ha de requerir de parte de los creadores de la ley, una adecuada búsqueda de los orígenes de aquellos problemas sociales como lo es la violencia familiar, sólo así se podrá identificar cuan necesaria resulta la diferenciación de los tipos con características sexistas.

Pero luego surge otro cuestionamiento, ¿Es correcto entender la violencia de género como todo tipo de acto contrario hacia la mujer?, sobre ello encontramos lo indicado por la investigadora Laurenzo Copello(2017) quien en su artículo

científico titulado *La tutela específica de las mujeres en el sistema penal: una decisión controvertida*, en el cual indica lo siguiente:

Es claro que el concepto de violencia de género hace referencia a relaciones de poder, pero es absurdo deducir de ahí que cada golpe, cada insulto, cada amenaza, deben realizarse con el específico “ánimo de dominar” a la mujer en la situación concreta. Con independencia de las enormes dificultades de prueba que suscita este elemento subjetivo, lo importante es que se trata de una exigencia que nos conduce por el camino equivocado, ya que lo determinante no son los “motivos” que llevan al autor a ejercer la violencia en ese momento concreto sino el hecho en sí de utilizarla como forma de relacionarse con su pareja, desarrollando una pauta de conducta que tiene que ver con las relaciones de dominio y subordinación entre los sexos propias del patriarcado (pág. 101).

Pese a que significa una suerte de adaptación de las políticas públicas del Estado Peruano a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos que está obligado a cumplir, básicamente en la circunscripción a los derechos fundamentales principalmente a la dignidad, evitando rasgos de discriminación desde cualquier punto de vista, erradicar todo tipo de manifestación de estigmatización y básicamente a la eliminación de los estereotipos basados en clasificaciones que provocan desigualdad siendo su principal característica la subordinación.

2.9.2. Inclusión de enfoques diversos de protección de derechos humanos

La regla es bastante rica en los aportes que hace sobre la forma en que se ha de manejar la aplicación de la protección sobre garantía de derechos humanos, los cuales se sugiere tengan una aplicación transversal, necesariamente cuando se llegue al nivel de la interpretación y aplicación del artículo 3 de la Ley.

Pese a ello, debe entenderse que la regla no sólo está para que sirva de guía o definición, se requiere mucho más, esto es la creación de un esquema que permita a los enfoques de derechos humanos, su llegada a la concreción, lograr que la interculturalidad, generacional e interseccionalidad pueda tomarse en cuenta para que se puedan interpretar correctamente los contextos en que se desarrollan los actos violentistas.

Lo que busca la nueva ley es que el proceso construido se base en el respeto de los derechos humanos, enfocados sobre la dignidad humana como fuente de lo demás derechos fundamentales podemos señalar que dignidad e identidad están íntimamente relacionadas, tal es así, que la autora María Luisa Castán en su artículo científico titulado *La dignidad humana, los Derechos humanos y los Derechos Constitucionales* refiere que “la dignidad aparece, pues, como una seña de identidad del ser humano, como ser dotado de inteligencia y libertad, como ser moral” (pág. 1). Es decir, la dignidad se convierte en un derecho transversal en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos identificando al hombre como un ser dotado de derechos y deberes.

El Doctor Fernández Sessarego(2015) refiere que el estudio de la persona en tanto ser, junto con el reconocimiento de sus derechos nos han llevado a remontarnos a lo largo de la historia, en el misterio de la Creación como aquel que “(...) consiste, precisamente, en que, a pesar de que todos los hombres son iguales, no existen dos personas idénticas, que compartan exactamente la misma biografía” (pág. 42).; así mismo, podemos señalar que la identidad nos permite la individualización del ser humano, ya que si consideramos al ser humano como una persona libre podrá elegir de acuerdo a su voluntad y vocación su propia realización de su proyecto de vida, toda vez que el ejercicio de la dignidad es un signo distintivo de la personalidad.

La identidad del ser humano consiste en una unidad, que está conformada por elementos- algunos más predominantes que otros- ya sea su carácter espiritual, religión, cultura, ideología, que contribuyen a definir a las personas con sus propias características de identificación haciéndolos diferentes de los demás.

Siguiendo al autor quien define a la identidad personal como “(...) el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea “uno mismo” y no “otro”” (pág. 116). Del mismo modo, afirma que estas características de la personalidad tomadas como “(...) “cada cual” se proyecta hacia el mundo exterior, se fenomenaliza, y permite a los demás conocer a la persona, a cierta persona, en su “mismidad”, en lo que ella es en cuanto específico ser humano” (pág. 116).

El desarrollo de la personalidad depende del ejercicio de varios derechos fundamentales, convirtiéndose la identidad como señala la definición anterior, en el significado de “ser uno mismo” puesto que son las características las que identificaran a la persona ante la sociedad.

Precisamente desde este punto de vista se deben tener en cuenta las apreciaciones de ciertos tipos de violencia para identificar los factores que manan de esta diferenciación referida a la identidad, saber que tan apropiado resulta la catalogación de violencia, que tanta responsabilidad deberá atribuírsele al violentista y cuan difíciles son los aspectos que se contemplan en base a las relaciones de convivencia, que tanto se necesita para provocar que la represión por la violencia genere una protección de la identidad.

Por todo ello será preciso reconocer que entendemos por identidad en relación con el derecho a la dignidad, lo cual podemos advertir de las palabras del constitucionalista peruano Chanamé Orbe señala lo siguiente:

Termino amplio el cual describe los aspectos generales de la personalidad total del individuo, esto incluye la asimilación de normas sociales, valores, creencias, costumbre, etc. La identidad es determinada por las características interpersonales e intrapersonales, el contexto ideológico y las interacciones de los componentes significativos de mundo (Chanamé Orbe, 2009, pág. 108).

Puesto que la característica interpersonal la entendemos como aquella que permite calificar la forma de entender y relacionarse con los demás, basándose en los estados anímicos (temperamentos, emociones, habilidades). Al mismo tiempo las características intrapersonales nos permitirán tener un concepto respecto al tipo de persona con las que nos relacionamos (la conciencia del individuo respecto a sus capacidades y limitaciones), reconociendo nuestro yo interior con realismo quienes somos, como somos y que queremos.

La identidad personal es un derecho fundamental que su reconocimiento permite al individuo desarrollarse con dignidad en un entorno social, permitiéndoles ejercer sus capacidades frente a los demás sujetos en base a la asimilación de las normas, valores y otros elementos y por el solo hecho de formar parte de la comunidad.

Por lo mismo que debe exigirse un análisis desde diferentes puntos de vista que permitan evidenciar la violencia y discriminación que viven las mujeres de nuestro país en torno a diferentes variables (edad, raza, clase, estado civil).

2.9.3. Respecto a la celeridad y las garantías de tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar

El proceso de tutela que se evidencia en la Ley 30364, ha traído innovaciones, básicamente cambios estructurales, como es el caso de que ahora no incluye la participación de fiscales de familia (modificándose así el artículo 8 de la

LPFVF), interesa saber más bien si habrá sido una acción correcta, pues bajo el mediano entender la carga procesal que se manejaba en el Ministerio Público ahora ha sido trasladada a los Juzgados de Familia, por lo mismo que resulta necesario averiguar si hará falta la creación de Juzgados especializados que atiendan exclusivamente este tipo de circunstancias violentistas.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo (2017) denominado *La Ley N° 30364, La Administración De Justicia Y La Vision De Las Víctimas*, en el cual señala respecto a la intervención mermada del Ministerio Público según la estructura procesal de la Ley bajo crítica:

De acuerdo a lo establecido en la norma precedente, el/ la fiscal de familia era quien solicitaba las medidas de protección, siendo otorgadas por el/la juez de familia. La norma actual no contempla la intervención de la Fiscalía, salvo en los casos donde hay menores de edad afectados. No obstante, también se han identificado algunas afirmaciones que consideran que la ley vigente es un retroceso, debido a que fomentaría el quiebre de las familias.

- “Fomenta que la familia se desintegre, no habiendo forma que puedan reconstruir el hogar; no se permite solución de conflictos, es netamente sancionado”.
- “Es un trámite burocrático que es más frío en atención a la víctima y por la penalización que se le ha dado, en el mayor de los casos, termina siendo archivado”
- “Es un retroceso debido a su falta de implementación total”.
- “La nueva ley es un desastre. Penaliza lo más mínimo, conflictos entre parejas. No fomenta soluciones de armonía familiar. Busca desintegrar la familia como cédula básica de la sociedad. Los hijos van a vivir sin la presencia de un padre o una madre” (pág. 45).

Según se puede apreciar son duras las críticas que se hace al efecto de la Ley, desde el punto de vista procesal, siendo importante resaltar el hecho de que se

haya establecido en el artículo 15 la obligación por parte de la Policía Nacional del Perú de comunicar los actos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en cualquiera de sus comisarías a nivel nacional, en un máximo de 24 horas al juzgado de familia o al juzgado que cumpla sus funciones. Actualmente se ha modificado esta sección de la Ley agregando la responsabilidad de la Policía Nacional para que cumpla con la ejecución de las medidas de protección, además de llevar un registro estadístico de las denuncias por agresiones, el mismo que no se ha podido acceder en razón a una respuesta negativa por parte de la institución, obrando sólo los registros de las últimas semanas.

Pese a ello otro aspecto procesal que si resulta positivo es que la norma señala en su artículo 16 que el juzgado de familia tiene la obligación de resolver en un máximo de 72 horas las medidas de protección que son necesarias de ser otorgadas a la víctima para proteger su integridad. Esto resulta favorable porque anteriormente la resolución de medidas de protección se dilataba, ya que los fiscales de familia derivaban la resolución de estas medidas a los fiscales penales, quienes eran los que las solicitaban al juzgado.

Además, se contempla que la resolución de medidas de protección debe darse en una audiencia oral, lo que garantiza que el juzgado conozca de forma inmediata la situación de la víctima a diferencia de lo que ocurría anteriormente. También, resulta positivo que en esta misma audiencia el juzgado pueda pronunciarse sobre las medidas cautelares que resguarden pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, entre otros, porque esto agiliza el otorgamiento de las mismas que antes tenían que ser solicitadas de manera aparte.

2.9.4. Respecto a la garantía del debido proceso frente al otorgamiento de las medidas de protección.

Tal cual se ha podido observar en el ejercicio procesal respecto de la aplicación de la Ley 30364, existe un problema recurrente pues la ausencia del

agresor a la audiencia indicada no impide que el juzgador dicte las medidas de protección, pues así lo permite el Reglamento de la Ley 30364 en su artículo 35, pero ello sin duda atenta el debido proceso que se supone debería respetarse en dicho acto procesal.

Esta afirmación se puede hacer bajo el refrendo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ser pronuncia sobre lo que corresponde al debido proceso, donde se hace un desarrollo indicando como recomendación la aplicación o creación por parte de los Estados para que las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención referidas a las exigencias del debido proceso legal y se entiende que el debido proceso legal, como se indicó en el párrafo 69, de la sentencia de 31 de enero del 2001, emitida por la CIDH (caso Tribunal Constitucional vs. Perú), constituye “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del estado que pueda afectar sus derechos” (Caso Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú, 2001).

De lo que habla la sentencia básicamente es el respecto al debido proceso, por lo mismo que se debe traer a colación la definición del mismo para determinar el ámbito de su aplicación; así se tiene inicialmente como referencia a la definición que hace el jurista peruano Dr. César Landa Arroyo (2012), quien en su libro denominado: *El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos*, se refiere al debido proceso de la siguiente manera:

El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho “continente” pues comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito

constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera específica. (pág. 16)

Se está hablando pues de un carácter exclusivo como derecho del ser humano, el mismo que incluye una serie de garantías que permiten un adecuado desarrollo procesal, tanto en su dimensión judicial como en otras dimensiones; especialmente en lo que corresponde al derecho procesal penal tiene una vital importancia su irrestricto respeto, buscar el equilibrio de los derechos que corresponden a cada una de las partes, ya que en esencia lo que asegura el debido proceso es la emisión de una decisión procedimentalmente correcta en cuanto a las etapas y plazos, y más que todo, que se haga justicia.

Se puede encontrar otro aspecto importante sobre el comentario de Landa, en el sentido estructural del debido proceso, pues lo denomina un derecho continente, de lo que se puede comprender que está compuesto o integrado por ciertas garantías relacionadas al proceso, desde el punto de vista formal incluyendo los procedimientos y las reglas para su correcto desempeño; así también se ubica otra parte material, que tendrá que ver con el fondo de una situación ventilada.

Por otro lado, también encontramos la definición dada por el investigador José Ávila Herrera (2004), quien en su tesis para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con mención en ciencias Penales, denominada: *El Derecho al Debido Proceso Penal en un Estado de Derecho*, señala que:

(...) La garantía del debido proceso es reconocido como un derecho fundamental, consagrado en un instrumento de derecho público, y cuya titularidad no se limita ya a los miembros de un estamento (...), sino que se presenta como un derecho de todos los ciudadanos de un Estado o de todos los hombres por el hecho de serlo. (pág. 128).

Ha de entenderse la necesidad de que tal principio o derecho deba estar incluido en un dispositivo legal y que es un derecho de todos los ciudadanos reconocidos por los estados en sus cartas políticas; pero además, podemos decir que este derecho, también lo encontramos en el contexto de tratados y convenios en materia de derecho internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los que han sido integrados a las constituciones por medio del bloque de Constitucionalidad.

En ese sentido, existe la necesidad de contar con un marco referencial, como lo es un verdadero Estado Democrático Constitucional de Derecho, que tenga como base fundamental la Ley y el respeto irrestricto de los derechos humanos, donde se desarrolle la paz, la igualdad y la justicia, pues sin esto no podríamos garantizar un debido proceso como parte de la administración de justicia y sobre todo de su acceso, por lo que ello implica que los operadores jurídicos como parte del sistema lo fortalezcan, respetando las garantías mínimas que debe haber en todo procedimiento regular, y cuando hablamos de operadores jurídicos.

En nuestro país, el artículo 43° de la Constitución Política establece que: “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana (...)”. En tal sentido, nuestro Estado tiene elementos esenciales propios de un Estado de derecho, los mismos que según Ticona Póstigo (2007), son:

a) a la justicia y seguridad jurídica, b) la Constitución como norma suprema, c) la división de poderes, d) la protección de los derechos fundamentales, e) la vinculación de los poderes públicos al derecho, a la ley”; asimismo, indica el autor que son elementos esenciales del postulado del Estado de Derecho también: f) la tutela judicial y vertiente procedimental de los derechos fundamentales”, a los cuales también agrega “el control jurisdiccional de los actos de la administración, el control de la constitucionalidad de las leyes, entre otros” . Es decir que de acuerdo al citado autor, un Estado Social y

Democrático de Derecho se sustenta en los principios de libertad, seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de funciones supremas del Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales para justamente garantizar el respeto irrestricto de las garantías mínimas que debe existir en todo procedimiento regular sea en instancia judicial o fiscal, como lo el tema de investigación. (pág. 31)

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 0426-2003- AA-TC, Fundamento 3, ha establecido, así como en reiterada jurisprudencia, que el debido proceso puede definirse de la siguiente manera:

El inciso 3) del artículo 139° de la Constitución establece como principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el Derecho (Caso Henry Eduardo Castro Paniagua contra la Corte Superior de Justicia de Junín, 2003).

La aplicación del debido proceso como principio optimizador de las características de la acción del Estado, es de carácter imperativo en procedimientos no solo de índole judicial, sino en todos los procedimientos, a efectos de que las personas puedan hacer uso de la defensa adecuada de sus derechos ante cualquier actuación u omisión por parte de los órganos del Estado y con ello, asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso del que son parte.

Volviendo a la sentencia de la CIDH, podemos notar que marca la pauta para que el desarrollo del proceso especial de otorgamiento de medidas de protección en sede preventiva llevada a cabo por los jueces de familia en audiencia única, implica la emisión de actos jurisdiccionales de un poder del Estado; en ese

sentido la común práctica, desde luego en base al reglamento de la Ley, de dictar medidas de protección aun cuando el denunciado por dichos actos se encuentre ausente, afecta al debido proceso toda vez que los filtros en la etapa preventiva aún son deficientes.

CAPITULO III

EL DELITO DE RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.

3.1. EL DELITO DE RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.

Respecto a este punto para fines de tener un acercamiento al contenido que justifica la existencia del tipo penal, es necesario señalar un aspecto importante como lo es la Tipicidad Objetiva del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, el mismo que servirá de guía para el desarrollo de la investigación con el fin de verificar la viabilidad de su aplicación para el caso del incumplimiento de las medidas de protección.

Así tenemos al profesor Salinas Siccha (2009), quien dice:

De la lectura del tipo penal se concluye que engloba dos conductas típicas claramente diferentes. La conducta del agente se identifica por los verbos rectores: desobedecer y resistir el cumplimiento de una orden impartida por funcionario competente en el ejercicio normal de sus funciones. Antes de argumentar en qué consiste cada una de las modalidades previstas como delito, creemos necesario detenernos en determinar qué debe entenderse por orden impartida por funcionario público. (págs. 87, 89).

Del mismo modo se hace preciso cuestionar si se puede justificar la relación del funcionario del cual habla Salinas puede equipararse con la idea del Juez y la sentencia como el mandato, por ello recopilamos la categoría jurídica de Orden impartida, definida por Rojas Vargas (1991), quien la considera de la siguiente manera:

Conditio sine qua non. Para que los actos del agente del delito se subsuman en la tipicidad del delito, tanto en su modalidad de desobediencia como resistencia, es que exista una orden, no una simple citación, declaración, petición o notificación no conminatoria. Se exige que la orden sea legal, es decir, impartida Por un funcionario público en el ejercicio normal de sus funciones. Aparte de ello es necesario que la orden sea expresa, ya sea verbal o escrita, sin ambigüedades. Debe estar dirigida puesta en conocimiento a un destinatario debidamente individualizado al que se conmina hacer o dejar de hacer algo. Así mismo, la orden individualizada deber poseer un contenido posible de realización en el marco de las relaciones jurídicas (pág. 743).

Entonces cabe el razonamiento de que si la orden es imposible de cumplir, el delito no aparece, el cual debemos llevar a la figura del incumplimiento de las medidas de protección, análisis que se realizará en el desarrollo de la investigación a fin de establecer si existe realmente una violación jurídica que justifique la imputación de este tipo, al respecto recogemos una jurisprudencia a tener en cuenta, la ejecutoria del 21 de febrero de 1985, en la cual la Suprema Corte ha expresado:

(...) este delito presupone la ejecución actual o inminente de un mandato u orden dictado por autoridad, en ejercicio de sus funciones; no pudiendo haber resistencia o desobediencia basada en el incumplimiento de una resolución que crea un estado, ya que una cosa es resistir o desobedecer a un funcionario y otra es violar un deber jurídico. (Jurisprudencia Penal, 1987) .

Debe tenerse en cuenta lo expresado por Juárez Muñoz (2017), quien en su artículo jurídico titulado: *Análisis del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en la legislación peruana*, donde citando las palabras de García Navarro, señala:

(...) tratándose de los actos de desobediencia, el momento comisivo parte desde el instante en que el destinatario toma conocimiento de su deber de acatamiento hasta el vencimiento del plazo señalado para dar cumplimiento a lo ordenado, incluidas las prórrogas del plazo debidamente ordenadas”. Por ende, se configura el delito de desobediencia cuando el sujeto activo no cumple con la orden en el tiempo exigido para ello (pág. 276).

3.2. EL CONCEPTO DE LA CONDUCTA DE DESOBEDIENCIA.

Con el fin de describir el concepto de la conducta de desobediencia se debe recurrir a la doctrina donde se encuentra la definición construida por Reátegui (2016), quien en su libro titulado: *Tratado de Derecho Penal. Parte Especial*, quien tomando la referencia de la Corte Suprema en su ejecutoria del 16/02/81, Exp N° 922-81- Cajamarca, indica lo siguiente:

La desobediencia es la rebeldía u oposición abierta, hostil y maliciosa, acompañada de actos de contradicción, decidida y resuelta al cumplimiento de un mandato u orden en curso de ejecución, expreso y personal de la autoridad en ejercicio de sus funciones (pág. 1367).

3.3. BIEN JURÍDICO

El normal ejercicio de la administración pública precisa que los mandatos emanados de la autoridad -siempre que estén ubicados en el marco de la ley- sean obedecidos. Es prudente volver a citar a Juárez (2017) quien refiere a su manera la identificación del bien jurídico para este tipo de delito:

En concreto protege la ejecutabilidad de la orden funcionarial —que es una parte de la actividad de la administración pública—. Existe una relación entre lo genérico y lo específico, ya que, al vulnerarse

los aspectos vinculados a la actividad funcional ejecutiva, tiene una repercusión en el buen funcionamiento de la administración pública (pág. 271).

3.4. CONSUMACIÓN

El delito se consuma con el incumplimiento de la orden. Si la orden impone una conducta activa, el ilícito penal se consumará cuando el agente omite su realización; si impone una omisión, con la realización de conducta prohibida.

Así Frisancho (2011), indica lo siguiente:

Tratándose de la resistencia a la orden impartida por un funcionario público ésta debe comprender una actitud corporal de oposición que recurra a medios violentos. Por esta razón, la resistencia -que es una forma de desobediencia- a las órdenes de un funcionario público se consuma cuando el agente esgrime medios violentos para incumplirlas. (pág. 216).

El delito tipificado bajo el nomen iuris de desobediencia y resistencia a la autoridad lo encontramos previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 368° del CP, conforme al texto normativo que a continuación se cita: “El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años”.

En la jurisprudencia se ha señalado que el delito en comentario

Consiste en desobedecer o resistir la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones; por lo tanto, para que se

consume dicha acción típica basta el incumplimiento de la orden u omitir su realización, siempre y cuando esta se encuentre dentro del marco de la ley. (En José Antonio Caro John, 1999).

Salinas Siccha (2014) sostiene:

Que para la configuración del delito bajo análisis, no basta una simple citación, declaración, petición o notificación no conminatoria. Se exige que la orden sea legal, es decir, impartida por un funcionario público en el ejercicio normal de sus funciones. Aparte de ello, es necesario que la orden sea expresa, ya sea verbal o escrita, sin ambigüedades, con contenido posible de ejecución, ya que si la orden es imposible, el delito no aparece. (pág. 106).

Para Eusebio Gómez A (1954) nos indica que:

Para efectos del delito materia de análisis, la orden es un mandato de carácter intimidatorio y de cumplimiento obligatorio que debe ser acatada y observada, emanada de una autoridad competente, en el legítimo ejercicio de sus funciones; para ella, esta tiene que haber sido puesta oportunamente en conocimiento del sujeto obligado, lo que en doctrina se conoce como “conminación previa”. (págs. 471-472)

La doctrina nacional tenemos que cuando se refieren a desobediencia a la autoridad indica:

Fidel Rojas Vargas (2007) señala que “desobedecer una orden impartida significa no aceptar, negarse a admitir, incumplir el mandato (de hacer o no hacer) dictado por autoridad competente en ejercicio de sus funciones” (pág. 1008).

Manuel Abanto Vásquez (2003) dice que “consiste en una conducta omisiva en cuanto al incumplimiento de mandatos u órdenes emanadas de la autoridad”. (pág. 175).

Manuel Frisancho (2011) Aparicio indica que “desobedecer es sinónimo de no acatar o no realizar lo mandado por el funcionario” (pág. 208).

Por su parte, Edward García Navarro expresa que “la desobediencia consiste en no acatar o incumplir lo ordenado previamente”. (García Navarro, 2009).

Ramiro Salinas Siccha (2014) dice que “la desobediencia se traduce en una conducta omisiva en cuanto el agente incumple el mandato u orden que le imparte el funcionario público competente”. (pág. 107).

Por su parte, Salinas Siccha ha señalado que “es la rebeldía u oposición abierta, hostil y maliciosa, acompañada de actos de contradicción, decidida y resuelta al cumplimiento de una mandato u orden en curso de ejecución, expreso y personal de la autoridad en el ejercicio de sus funciones” (pág. 107).

Según Carlos Alberto Juárez Muñoz (2017).

Resistir la orden emitida por el funcionario público es cuando el agente se opone abiertamente para que no se ejecute materialmente la orden. La resistencia puede dar como consecuencia que la orden no se ejecute o que esta se ejecute de manera distinta a la que supone su materialización o que suponga un obstáculo con la consecuente dilación en la ejecución de la orden. Cuando la orden no se ejecuta debido a los actos de resistencia, el servidor que la ejecuta termina por retirarse del lugar, sin lograr la ejecución de la orden, momento en el que se perfecciona esta modalidad delictiva. Tal como sucede

en el supuesto de la desobediencia, se podría cometer el delito de resistencia a la autoridad, siempre que la orden que se ejecuta sea factible de ser oponible según los recursos con que cuente el agente opositor, ya que, según creemos, no podríamos estar hablando de resistencia si la acción del servidor que ejecuta la orden es avasalladora debido a la intervención de un número considerable de miembros de la fuerza pública, frente a un solo sujeto que se resiste a la ejecución, por ejemplo, cuando el dueño de una tienda no deja que se lleve a cabo la clausura, pese a que existe la orden de clausura expedida por la gerencia municipal, por no cumplir con normas de salubridad y, pese a la negativa del destinatario de la orden, se lleva a cabo su ejecución, ya que es imposible la obstaculización por la gran cantidad de los servidores de la Municipalidad que la ejecutan. (pág. 270).

Pedro Barrientos nos indica:

Legislaciones sustantivas tratan al delito de desobediencia como parte integrante de un tipo delictivo que posee dos formas de acción, por un lado la resistencia y por otro lado, la desobediencia. Caso típico de este criterio legislativo es el Código Penal Argentino en cuyo art. 239 dispone: . . . Sera reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. .

A la par de este criterio, existen también otras legislaciones que separan o distinguen entre uno u otro delito, esto es, en base a que si el obrar comisivo es la resistencia y por otro lado, la desobediencia a cuyo efecto imponen sanciones distintas. Caso típico de esta tesitura es lo previsto por el Código Penal Boliviano.

Veamos: Art. 159. El que resistiere o se opusiere, usando de violencia o intimidación, a la ejecución de un acto realizado por un funcionario público o autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquellos o en virtud de una obligación legal, será sancionado con reclusión de un mes a un año.

art.160. El que desobedeciere una orden emanada de un funcionario público o autoridad, dada en el ejercicio legítimo de sus funciones, incurrir a en multa de treinta a cien días.

Como se puede apreciar, al menos en lo que a la legislación boliviana se refiere, se trata a la desobediencia como una figura atenuada en comparación al delito de resistencia, de allí la distinta imposición de penas. En cambio, en la legislación argentina se trata de un solo tipo delictivo con dos acciones excluyentes entre sí. (págs. 2 - 3).

CAPITULO IV

LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN PENAL Y SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO PENAL.

4.1. LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN PENAL EN LA DOCTRINA

En la búsqueda de una definición ubicamos el detalle descrito por el jurista Villavicencio Terreros (2006), quien en su obra titulada *Derecho Penal. Parte General*, donde señala que: “La teoría del delito o teoría de la imputación penal, se encarga de definir las características generales que debe tener una conducta para ser imputada como un hecho punible (...)” (pág. 223).

Del mismo modo según lo indicado por Jescheck y Wigend(2002): “La teoría del delito no se ocupa de los elementos de los tipos delitos concretos sino de aquellos aspectos del concepto de delito que son comunes a todos los hechos punibles”. (pág. 210).

Para que los elementos sistemáticos de esta teoría no entren en contradicción, se debe garantizar la “unidad de perspectiva valorativa”. “Pero la pureza de la sistemática no requiere llevar hasta sus últimas consecuencias cada una de las afirmaciones. Más bien debe reconocer la existencia de excepciones cuando estas puedan fundamentarse de modo convincente para no forzar la lógica interna del sistema”. (Jescheck & Weigend, 2002, pág. 214).

En definitiva, la teoría de la imputación penal es un instrumento ordenador de criterios y argumentaciones que se pueden utilizar en la decisión y solución de casos jurídico-penales. (Muñoz Conde & García Aran, 2002, pág. 203)

4.2. EL CONCEPTO DE IMPUTACIÓN EN LA DOGMÁTICA ACTUAL

En la dogmática actual la teoría de la imputación ha tomado un giro diferente, acaso más cercano a Kelsen, aunque sin perder su conexión con la teoría de la acción, concebida ésta como "parte de la teoría de la imputación". En este sentido afirma Jakobs que "la misión de la imputación surge de la función de la pena"; "la imputación establece qué persona debe ser penada con el fin de estabilización de la validez de la norma. El resultado es el siguiente: se debe penar a un sujeto que ha obrado de manera contraria a la norma y en forma culpable (siempre y cuando la ley no renuncie a la pena, algo que puede tener diversos fundamentos). La teoría de la imputación desarrolla los conceptos utilizados: conducta del sujeto, quebrantamiento de la norma, culpabilidad".

De esta teoría de la imputación, que alcanza a toda la teoría del delito en sentido tradicional, se debe distinguir la teoría de la imputación objetiva, en la que "se trata de la determinación de las propiedades objetivas de una conducta imputable". Este aspecto de la imputación, es decir, la imputación objetiva, se vincula fundamentalmente con la conexión entre la conducta y el resultado por ella producido. Dicho con otras palabras: con la limitación de la causalidad (natural) sobre bases normativas. (Roxin, 2017, pág. 95).

La imputación penal, implica la determinación de la existencia de un hecho delictivo y la atribución de este a su autor como su propia obra; a lo que es lo mismo, tal como se señala en las diversas sentencias o ejecutorias penales: "la determinación de la comisión del delito así como el de responsabilidad penal de su autor o partícipes de un hecho imputado". Solo luego de la atribución válida de responsabilidad penal al agente de la afectación del bien jurídico, precisando en un específico objeto de protección, se puede legitimar la aplicación de la pena y eventualmente las demás consecuencias previstas para el delito" (...). (Roxin, 2017).

En conclusión, para la imputación penal (atribución de responsabilidad al agente del hecho), se requiere determinar que estamos ante un hecho delictivo y ante un sujeto responsable del mismo, al cual se le aplicara la pena (pag 181).

4.3. LA INFLUENCIA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO PENAL SOBRE LA IMPUTACIÓN DEL DELITO.

La razón del ser del capítulo que se desarrolla es el reconocimiento de la función de los principios rectores del Derecho que según lo indicado por el investigador Texo Denes Agustín (2017), quien en su artículo científico titulado: *ignorancia y opacidad: una mirada al derecho penal*, en el cual indica que: “(...) el ejercicio del *ius puniendi* debe ser acotado en sus márgenes de acción por los principios de legalidad, lesividad y culpabilidad” (pág. 283).

Se denota pues, la importancia de la comprensión de los principios que dicho sea de paso tienen un origen constitucional, por ello la exigencia de su contemplación en lo que se reconoce como la constitucionalización del Derecho Penal, en busca de la orientación garantista de los fallos que imputan ciertos delitos, tal cual lo reseña el profesor Landa Arroyo (2015), en su artículo jurídico titulado: en el cual detalla lo siguiente:

(...) hoy en día, el ordenamiento jurídico penal –sustantivo, procesal y de ejecución– no puede entenderse sin el respeto del orden público constitucional convencionalizado. Pero muchos jueces que ejercen la función jurisdiccional no suelen aplicar los principios constitucionales. Es como si los procesos penales, en los cuales la tutela de derechos fundamentales debería ser más intensa, todavía fueran ajenos a la Constitución convencionalizada (pág. 168).

Dentro de lo que significa la aplicación del rigor constitucional que advierte

el autor se puede verificar la presencia de otro elemento coadyuvante para la eficacia del carácter garantista del Derecho Penal, este es el carácter de convencionalidad que ha de respetar la estructura jurídica.

En ese sentido corresponde realizar la observación de los principios que meridianamente resultan de utilidad para garantizar tal eficacia, por lo mismo que se iniciara por el de la mínima intervención del derecho, dado que representa el pilar que marca la finalidad del derecho penal, limitando el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado.

4.3.1. LA MÍNIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL COMO PRINCIPIO QUE LIMITA LA IMPUTACIÓN EN EL DERECHO PENAL.

La imputación tiene como meta determinar la responsabilidad de un determinado sujeto respecto de la conducta que se califica como delito, para el Derecho Penal esta función se desarrolla a través del análisis tanto a nivel objetivo cuanto al subjetivo se refiere; interesa en esta porción de la investigación referirse a la configuración del tipo penal que ha de servir para dicha calificación.

Es decir, la construcción del tipo ha de tener como primera fase de la evaluación de la conducta a tipificar, el cuidado de no sobrepasar aquel límite que la Constitución establece sobre el ius puniendi que ejerce el Estado, siendo que para el Derecho Penal se encuadra en la mínima intervención como principio base, el cual se encuentra definido por el investigador Monroy Rodríguez (2013), quien en su artículo jurídico titulado: *Principio de Mínima intervención ¿Retórica o realidad?*, en el cual señala:

El principio de intervención mínima es un límite al ius puniendi estatal que consagra la necesidad de fragmentar la acción penal, valorar los bienes jurídicos por proteger, dirigir el poder sancionador hacia los daños graves a importantes bienes jurídicos y actuar sólo

en aquellos casos en que las demás herramientas administrativas, religiosas, educativas, etc (pág. 28).

La percepción de la finalidad y el efecto de la mínima intervención del Derecho como principio, se puede apreciar de lo señalado por el profesor Bramont-Arias Torres, Luis Miguel (2002), en su libro *Manual de Derecho Penal. Parte General*, sobre la mínima intervención:

Es así que el principio de mínima intervención supone un límite fundamental a las leyes penales, estableciendo que éstas solo se justifican en la medida que sean esenciales e indispensables para lograr la vida en sociedad. Se quiere evitar que los grupos de poder utilicen las leyes penales para su propio beneficio; la ley que sólo sanciona conductas y responder a los requerimientos de la colectividad no debe ser calificada como penal (pág. 89).

Se aprecia nuevamente el límite que supone la aplicación de este principio como control de la acción punitiva del Estado a fin de evitar el uso indiscriminado, como lo manifiesta al hablar de grupos de poder, siendo así el autor citado considera prudente desarrollar una suerte clasificación para el entendimiento adecuado del principio bajo estudio, señalando una estructura compuesta por dos manifestaciones considerándolas como sub principios, así el primero es el de fragmentariedad y el segundo el de subsidiaridad, detalle que se reseña a continuación:

Al desarrollar el primer subprincipio describe un aspecto importante que se resalta mediante la siguiente afirmación respecto a la fragmentariedad: Bramont-Arias Torres (2002):

Si el derecho penal interviniera en todas las situaciones en las que hay conflicto se correría un riesgo de paralizar toda la actividad

social y económica del país; además, pues las personas no pueden vivir bajo la constante amenaza de una posible sanción penal- aparecería una inseguridad total en los ciudadanos (...) (pág. 89).

Aspecto de la mínima intervención que se puede identificar como la garantía de seguridad jurídica que se presume otorga la estructura del derecho penal, puesto que el control que se ha de ejercer no debe rebasar el límite del equilibrio social. Formando parte de este sub principio se describe la relación con otro principio que lo denomina: “intervención mínima en las penas: este principio señala que se deben aplicar penas de corta duración, ya que, estas son más efectivas” (pág. 89). Este principio relacionado con la fragmentariedad del derecho penal se halla compuesto por otros dos sub principios siendo el primero descrito de la siguiente manera:

Bramont-Arias Torres (2002):

“Principio de Humanidad de las Penas: estas no tienen por qué ser inhumanas, debe entender a resocializar al sujeto y prevenir el delito. Nuestro ordenamiento penal incluye diversas figuras que puedan funcionar como alternativas a la pena privativa de libertad (...)” (pág. 90).

De lo indicado se puede rescatar la posibilidad que otorga el derecho penal para poder establecer sanciones que no necesariamente vulneran el derecho a la libertad personal, sino la aplicación de restricción o imposición de obligaciones que sin duda alguna terminarían funcionando de una manera más efectiva incluso respecto a la resocialización del sujeto que cometió el ilícito penal.

Luego señala el mismo autor al otro sub principio relacionado con la intervención mínima de las penas, al carácter de proporcionalidad como principio, describiéndolo de la siguiente manera:

Bramont-Arias Torres (2002):

Principio de proporcionalidad: La pena debe ser proporcional a la magnitud del daño causado y al desprecio al orden jurídico. Debemos tener en cuenta que los costos sociales de la pena son elevados, los efectos negativos de la misma inciden no solamente a sobre la persona que cometió el delito sino también sobre sus familiares, su ámbito social y sobre la sociedad. Esto nos lleva a firmar que la intervención penal más que solucionar el problema puede agudizarlo (pág. 90).

La intención de recoger lo acotado por este autor es dejar en claro el fundamento que justifica la intervención del principio de mínima intervención, siendo que en su primer nivel de evaluación se aprecia la objetividad que vincula a la garantía que debe representar el ejercicio del ius puniendi del Estado bajo los límites ya señalados, desde luego en el primer aspecto comprendido por la fragmentariedad del Derecho Penal; luego resulta importante detallar el otro sub principio que compone la mínima intervención y que según el jurista Villavicencio Terreros Felipe (2006), en su libro *Derecho Penal Parte General*, donde señala:

Principio de subsidiaridad se trata de la última ratio o extrema ratio, en el sentido que sólo debe recurrirse al derecho penal cuando han fallado todos los demás controles sociales. El derecho penal debe ser el último recurso que debe utilizar el Estado, debido a la gravedad que revisten sus sanciones. Los ataques leves a los bienes jurídicos deben ser atendidos por otras ramas del derecho o por otras formas de control social.

La limitación que describe el autor está relacionada con la forma en que se puede discriminar el tratamiento de los actos que atentan contra el orden social, los cuales no necesariamente son atribuibles de una sanción generada en el Derecho Penal, existiendo otras alternativas que se ubican en el derecho mismo.

4.3.2. EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD.

El principio que se busca desarrollar en esta parte de la investigación es el que se consigna como el de lesividad, el mismo que también se le conoce como principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, cuya definición es referida por el jurista Villavicencio Terreros (2006), quien describe al principio de la siguiente manera:

Principio de lesividad de acuerdo al principio de lesividad o ofensividad, para que una conducta sea considerada ilícita no sólo requiere una realización formal, sino que además es necesario que dicha conducta haya puesto en peligro o lesionado un bien jurídico determinado. Se le Identifica con la máxima "Nullum crimen sine injuria". El título preliminar del Código Penal declara que « la pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley » (artículo IV) (págs. 94-95).

Resulta fácil de verificar la finalidad del principio de lesividad, que se ocupa de establecer como condición de un daño producido o pro producirse respecto de un determinado bien jurídico, lo cual se constituye como uno de los requisitos para que se califique a una conducta como pasible de sanción, que para el caso estudiado sobre la resistencia y desobediencia a la autoridad se aprecia una afectación directa puesto que el perjuicio se ocasiona en forma directa dañando la esencia estructural de la correcta administración de justicia, la cual está relacionada con el principio de autoridad.

Es evidente que la lesividad al igual que el resto de principios se relacionan unos con otros, en efecto existe una relación palpable con el principio de la mínima intervención del derecho a cuya concurrencia acude para conseguir su finalidad, esto es que funcione como un límite que permita poner coto a la injerencia del ius puniendi del Estado sobre la calificación de las acciones que se presumen como delitos.

Así pues encontramos lo indicado por Bustos (2004) quien en su libro titulado: *Título*, donde señala lo siguiente: “Si se Obviara este principio, el de intervención mínima sería un límite demasiado vago. Por el contrario, con su exigencia se debe precisar que es protegido y, con ello, el Estado intervendría limitando su función punitiva” (pág. 551). Sobre lo mismo se puede reseñar lo indicado por el jurista Binder (200), quien en su libro titulado *Título*, señala: “para evitar esta distorsión del uso de poder punitivo existe el principio de lesividad, que orienta el uso de ese poder hacia finalidades exclusivamente sociales y evitar distorsiones moralistas o el uso de instrumentos de violentos para sostener la pura autoridad del Estado” (pág. 157).

Dada la definición de la directriz que relaciona la imputación de los delitos con el daño o lesión a un determinado bien jurídico, para poder usarlo como fundamento que discrimine al incumplimiento de las medidas de protección y excluirla del área de imputación del tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad, tendría que razonarse indicando que dicha acción no vulnera el bien jurídico que protege el tipo mencionado, es decir que no menoscabe la estructura esencial de la administración de justicia.

Evidentemente el razonamiento que permite usar el principio de lesividad como fundamento al nivel indicado, estaría incompleto puesto que hace falta tomar la relación ya señalada líneas arriba, respecto del principio de mínima intervención del derecho, puesto que al evaluar la intensidad del daño, bien puede encontrarse una suerte de gradación del mismo; en consecuencia operaría la limitación que ofrece el sub principio de fragmentariedad, por lo cual estaría produciéndose la optimización de la regla en su aplicación a fin de evitar excesos en su ejecución.

Vale decir que esta relación de principios permitirán establecer una sanción más adecuada en lo que corresponde a la verificación del daño causado, en tanto supere el límite que establece la fragmentariedad como principio que según lo

reseñado por el maestro Villavicencio (2006), puede aperturar la posibilidad a otros medios de acción distintos al Derecho Penal:

(...) Cuando nos referimos a la protección de bienes jurídicos, no estamos hablando de la protección de todos los bienes jurídicos. Por ello, aquí juega un papel importante el principio de fragmentariedad y la subsidiaridad. (...) no sólo el derecho penal puede intervenir exclusivamente su protección, sino también otros medios de control social (pág. 95).

4.3.3. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

En materia penal, el poder punitivo del Estado (*ius puniendi*) se manifiesta a través del establecimiento de sanciones de las conductas previamente definidas como delictivas. De ahí que en el ámbito penal se suele hablar del principio de proporcionalidad de las penas.

Tal como lo señala el profesor Díez Ripollés, José Luis, (2003), quien describe al principio de la siguiente manera:

El principio de proporcionalidad, como principio independiente dentro de los principios de la sanción, recoge la creencia de que la entidad de la pena, esto es, la ficción que ello origina por su naturaleza e intensidad o por los efectos socios personales que desencadena, debe acomodarse a la importancia de la afección al objeto tutelado y a la intensidad de la responsabilidad concurrente. (pág. 162).

Es decir toma como postura que el principio de proporcionalidad estará referido al grado de “jerarquización” de la afectación del bien jurídico protegido, indispensablemente este principio se desprende la necesidad que el bien jurídico

tenga capacidad de relevancia para demostrar una amenaza de privación de la libertad.

El principio de proporcionalidad comúnmente ha sido orientado como una “prohibición de exceso” dirigida a los poderes públicos. De hecho, esta es la afirmación que se encuentra recogida en el artículo *VIII del Título Preliminar del Código Penal*, en la parte en la que dispone que “*la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho*”. No obstante, si se reconoce que, en razón del principio de lesividad, el derecho penal plasma atentados contra bienes de relevancia constitucional y, singularmente, contra derechos fundamentales, procurando su protección; el principio de proporcionalidad de las penas, prima facie, también implica una “prohibición por defecto”, es decir, la prohibición – cuando menos como una regla general no exenta de excepciones– de que la pena sobredisminuya la responsabilidad por el hecho.

En la búsqueda de una definición más amplia y en la cual se abarque el sentido general del referido principio, pues ubicamos el detalle descrito por Garrido Montt Mario (2001), quien en su obra titulada *Derecho Penal. Parte General*, donde señala que:

El principio de proporcionalidad en sentido general, significa modular la sanción punitiva, tomando en referencia el grado de afectación producido en el bien jurídico no sólo desde un aspecto material(antijuricidad), sino también desde la esfera interna del agente(dolo o culpa). Importa la correspondencia que debe subyacer entre la intromisión de la esfera de la libertad individual con la gravedad del delito y el juicio de reproche culpable. De esta forma se limita la intervención del ius puniendi al ámbito de libertad lo estrictamente necesario para garantizar los fines preventivos de la sanción punitiva. En otros términos, la pena (tipo de sanción y

extensión) será proporcional a las condiciones que la hacen “necesaria”; en ningún caso pueden exceder esa necesidad. (pág. 49)

Por ello, el *tribunal constitucional* ha determinado “que ninguna de las finalidades preventivas de la pena podría justificar que exceda la medida de la culpabilidad en el agente, la cual es determinada por el juez penal a la luz de la personalidad del autor y del mayor o menor daño causado con su acción a los bienes de relevancia constitucional protegidos. Pero a su vez, ninguna medida legislativa podría, en un afán por favorecer ‘a toda costa’ la libertad personal, anular el factor preventivo como finalidad de la pena a imponerse. En tales circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos bienes protegidos por el orden constitucional, se estaría quebrando el equilibrio social que toda comunidad reclama como proyección de la Constitución material”.

En la actualidad, pues observamos que la teoría moderna de la imputación del delito desatendió las posiciones retributivas de la pena, para asumir una posición preventiva, tal como lo afirma Bustios Ramírez (1989), en su obra titulada *Manual Derecho Penal. Parte General* al indicar lo siguiente:

(...)si bien el planteamiento de proporcionalidad es puesto de relieve por las teorías preventivas, y por tanto la proporcionalidad está en relación a la utilidad (intimidación, de reafianzamiento de la conciencia jurídica o de resocialización o reeducación), en la medida que está se recogen modernamente las categorías dogmáticas tradicionales, se produce una limitación a esta relación con el fin preventivo propiamente tal y se entra a jugar también proporcionalidad con la protección de los bienes jurídicos y a la responsabilidad del sujeto (pág. 44).

Es por ello que la determinación judicial de la sanción punitiva, y los fines preventivos juega un rol importante a fin de graduar la penalidad de acuerdo a un índice de justicia y de utilidad. Donde el fin preventivo general de la pena asuma una función gravemente de pena, tomando en razón el interés protegido objeto de afectación, la jerarquía del bien jurídico, el grado de amenaza en la conducta, siendo estos factores los que deben enlazar en la intimidación que debe generar la sanción hacia el colectivo, pero, que no puede sobrepasar los márgenes legales previstos en el tipo penal.

La utilización política de la violencia criminal cotidiana por parte del legislador, ha significado la desvinculación del derecho penal de sus funciones ordenadoras, sometidas a la idea de un estado social y democrático de derecho, como los principios de subsidiaridad, ultima ratio y proporcionalidad, para asumir tareas meramente de percepción cognitiva, el afianzamiento de una sensación de seguridad cuyos alcances puramente simbólicos- por su inevitable ineficacia-, a lo único que van a conducir es a su desgaste nominal y a su deslegitimación como medio de control social formalizado.

Es por ello la postura que toma Rodríguez Sarillas(1996),al mencionar que: La maximización de la respuesta jurídico penal se comprende en un mensaje apocalíptico de la violencia cotidiana, donde la fuerza de la razón que provocan los principios rectores es avasallada por una política criminal que se dirige fatalmente hacer del instrumento punitivo o medio receptor de intereses políticos ideológicos y moralista por lo que se recurre a elementos superficiales vagos e imprecisos que remueven los cimientos de un derecho penal liberal caracterizado por el principio de estricta legalidad. Las figuras de comportamientos prohibidos han de ser objeto y empíricamente verificables no basta pues con la simple enunciación legal de la prohibición mi actividad de un modelo garantista el principio de estricta legalidad y exige la reserva absoluta de la ley que prescribe la transitividad en la precisión empírica de las formulaciones legales esto es la posibilidad de su comprobación y refutación.

Por ellos si se vulnera el principio de proporcionalidad de la sanción, la libertad pierde su valor y un orden jurídico-estatal que supuestamente debería tutelarla de forma intensa. El derecho penal se convierte en una fuente de expectativas sociales que desborda sus propias capacidades para hacer frente a la delincuencia. Un el derecho penal así admitido no podrá subsistir como un herramienta de solución estatal idóneo de los problemas en el marco de conjunto de los sistemas de control social. Y con ello no sólo según el principio de proporcionalidad de la sanción sino también el principio de la legalidad material pues a partir de su concreción normativa por parte de los tribunales se impondrán penas que rebasen los marcos penales fijados con los tipos penales, con la consiguiente afectación del fin preventivo especial de la pena.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Determinar si existe la posibilidad de imputar por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, antes de establecerse el delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar a nivel fiscal.

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal.

Siendo así, se logró estimar que la muestra a trabajar está conformada por cincuenta (50) individuos, sobre los cuales se aplicó la encuesta que figura en el anexo número N° 01.

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según corresponda al rubro, de la siguiente manera:

5.1.1. Resultados del análisis estadístico.

Tabla 1: Evolución de la incidencia de violencia familiar- sede fiscal- Distrito Judicial de Lambayeque- 2014-2018

Evolución de la incidencia por violencia familiar en función a los casos atendidos en sede fiscal entre los años 2014- 2018	
2014	15, 6433
2015	2,217
2016	2,609
2017	4,006
2018	25,470

Ilustración 1: Gráfico de la Tabla N° 1



5.1.2. Resultados del análisis jurisdiccional sobre la aplicación de medidas de protección.

De acuerdo a la información obtenida de los Juzgados de Familia de la Ciudad de Chiclayo, se ha podido verificar la existencia de medidas de protección otorgadas en los procesos de violencia familiar, de los cuales se ha tomado una muestra de 7 resoluciones que contienen dicha orden a fin de que sea cumplida por el supuesto agresor, las mismas que se analizan en el siguiente cuadro.

Tabla 2: Análisis de las Medidas de Protección otorgadas en los Juzgados de Familia de la Ciudad de Chiclayo.

N° Exp	Documento	Orden	Coerción
<u>07108-2017-0-1706-JR-FT-03</u>	Resolución Judicial	<p>1. IMPEDIMENTO de acercamiento o proximidad a doña MARTHA VILLACORTA ASPAJO.</p> <p>2. LA ABSTENCIÓN de todo acto que implique agresión física, verbal o acoso por parte del demandado JOSÈ JUAN BEZZOLO SOKOLICH.</p> <p>3. LA PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN por parte de JOSÈ JUAN BEZZOLO SOKOLICH.</p> <p>4. SE DISPONE EL RETIRO del inmueble ubicado en la calle Los Tumbos 115-urbanización Santa Victoria-Chiclayo, de don JOSÈ JUAN BEZZOLO SOKOLICH (el plazo de quince días).</p> <p>5. TERAPIA PSICOLÒGICA a favor de ambos justiciables, la misma que será brindada por el Psicólogo del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de Chiclayo.</p>	Las medidas de protección antes señaladas de disponen bajo apercibimiento para don JOSÈ JUAN BEZZOLO SOKOLICH , en caso de incumplimiento, de ser denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal.
05837-2018-0-1706-JR-FT-02	Resolución Judicial	1. La PROHIBICIÓN a don NIXO NÚÑEZ SÁNCHEZ , de realizar cualquier acto, gesto, humillación, insulto, expresiones subidas de voz, palabras soeces, ofensas, amenaza, golpes u otro acto que pudiera afectar la integridad física o psicológica	1. Se hace saber al demandado NIXO NÚÑEZ SÁNCHEZ , que debe cumplir las medidas de protección impuestas bajo apercibimiento de ser

		de la agraviada, doña GEOVANA ELIZABETH LINARES PURISACA. 2. La ABSTENCION por parte de don NIXO NÚÑEZ SÁNCHEZ , de realizar cualquier acción para tener comunicación con fines de agresión con la agraviada, GEOVANA ELIZABETH LINARES PURISACA.	denunciados por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
08713-2018-0-1706-JR-FT-02	Resolución Judicial	1. La PROHIBICIÓN a don JULIO VÁSQUEZ LOAIZA , de acercamiento a la víctima, DIANA CELESTE MENDOZA ROSADO. 2. La ABSTENCION por parte de don JULIO VÁSQUEZ LOAIZA , de realizar cualquier acto, gesto, humillación, insulto, expresiones subidas de voz, palabras soeces, ofensas, amenaza, golpes u otro acto que pudiera afectar la integridad física o psicológica de la agraviada DIANA CELESTE MENDOZA ROSADO. 3. La ABSTENCION por parte de don JULIO VÁSQUEZ LOAIZA , de realizar cualquier acción para tener comunicación con la agraviada DIANA CELESTE MENDOZA ROSADO.	Se hace saber al demandado JULIO VÁSQUEZ LOAIZA , que debe cumplir las medidas de protección impuestas bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad
EXP. No. 4996-2017	Resolución Judicial	1. La PROHIBICIÓN a don GABRIEL CHIZA DÍAZ , del uso de cualquier modalidad de violencia física o psicológica en agravio de doña SONIA DEL PILAR SUYÓN SATORNICIO. 2. La ABSTENCION por parte de don GABRIEL CHIZA	No especifica.

		<p>DÍAZ, de realizar cualquier acto, gesto, humillación, insulto, expresiones subidas de voz, palabras soeces, ofensas, amenaza, golpes u otro acto que pudiera afectar la integridad física o psicológica de doña SONIA DEL PILAR SUYÓN SATORNICIO.</p> <p>3. LA PROHIBICION a don GABRIEL CHIZA DÍAZ, de cualquier tipo de comunicación epistolar electrónica o por cualquier otro medio con el propósito de enunciar amenazas, acoso o cualquier acción intimidante en agravio de la víctima, doña SONIA DEL PILAR SUYÓN SATORNICIO.</p> <p>4. La PROHIBICIÓN a don GABRIEL CHIZA DÍAZ, de acercarse a doña SONIA DEL PILAR SUYÓN SATORNICIO, a menos de la distancia de diez metros, sea cual fuere el lugar donde ella se encuentre, así como al domicilio de la declarante, ubicado en el centro poblado El Chorro s/n de Pomalca.</p>	
EXP. N° 6709-2017	Resolución Judicial	<p>1. PROHIBICIÓN a don RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA, del uso de cualquier modalidad de violencia física o psicológica en agravio de la denunciante HELGA JEANETTE ADRIANA SAMAME CONSTANTINI.</p> <p>2. ABSTENCION a don RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA, de realizar cualquier acto, gesto, humillación, insulto,</p>	No especifica.

		<p>expresiones subidas de voz, palabras soeces, ofensas, amenaza, golpes u otro acto que pudiera afectar la integridad física o psicológica de la agraviada HELGA JEANETTE ADRIANA SAMAME CONSTANTINI.</p> <p>3. LA PROHIBICION a don RICARDO AUGUSTO ZAPATA LOZADA, de cualquier tipo de comunicación epistolar electrónica o por cualquier otro medio con el propósito de enunciar amenazas, acoso o cualquier acción intimidante en agravio de la víctima HELGA JEANETTE ADRIANA SAMAME CONSTANTINI.</p>	
07854-2017-0-1706-JR-FT-04	Resolución Judicial	<p>1. EL CESE DE TODO ACTO DE VIOLENCIA Y TODA FORMA DE COMUNICACIÓN AGRESIVA U ACTO DE HOSTILIZACIÓN QUE PUDIERAN PRESENTARSE CONTRA LA AGRAVIADA.</p> <p>2. PROHIBICIÓN de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación de naturaleza ofensiva o agravante.</p> <p>3. HÁGASE de conocimiento de DORIS HAYDEE LA ROSA RAMIREZ, de DORIS HAYDEE RAMIREZ DE LA ROSA y de JUAN JOSE LA ROSA</p>	No especifica.

		<p>RAMIREZ las medidas de protección dictadas a favor de ELDA MIRIAM LA ROSA RAMIREZ.</p> <p>4. DISPONER TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.</p>	
<p>07620-2017-0-1706-JR-FT-05</p>	<p>Resolución Judicial</p>	<p>1. PROHIBIR a don CESAR MANUEL ACUÑA SULLON, realizar actos que pudieran perturbar en cualquier forma y/o modalidad la tranquilidad y salud mental de la menor de iniciales L.V.A.P</p> <p>2. ABSTENCION a don CESAR MANUEL ACUÑA SULLON y a doña ANA NADIR PAREDES SEMINARIO de discutir en presencia de la menor, y de proferir algún insulto, ofensas, frase o palabra peyorativa que origine un menoscabo en su estado, procurando en todo momento afianzar los lazos familiares.</p> <p>3. EXHORTAR a doña ANA NADIR PAREDES SEMINARIO y a don CESAR MANUEL ACUÑA SULLON a solucionar sus conflictos de la forma más armoniosa optando por el diálogo sin llegar a la agresión, debiendo abstenerse de involucrar a la menor de iniciales L.V.A.P. en sus problemas, siendo</p>	<p>No especifica.</p>

		responsables de la integridad física, psicológica, moral y emocional de su menor hija.	
--	--	---	--

Fuente: Creación propia en base al análisis de los expedientes cuyo número obra en la tabla y puede ser corroborada en el sistema de información judicial.

De la lectura del análisis se puede establecer en primer lugar que las siete medidas de protección observadas se encuentran contenidas en resoluciones judiciales, las mismas que constituyen el carácter especial contemplado en el artículo que prescribe el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, una orden legalmente impartida.

De otro lado se puede verificar que las órdenes impartidas tienen diversas características, entre las cuales se puede ubicar impedimentos, abstenciones, prohibiciones, retiro del hogar; en base a ellas se puede apreciar el carácter imperativo que se ejerce, pero, resulta imprecisa la distinción de límites que permitan al juzgador, ante una eventual evaluación de responsabilidad por desobediencia, el nivel de gravedad de suyo importante para la imputación del delito.

Finalmente se ha creado el rubro de coerción con la finalidad de incorporar la porción de la sentencia que provoca la obligatoriedad del cumplimiento a fin de evitar una sanción penal, esto es la invocación de la regla que la provocaría. Así, sólo se aprecia en tres de las resoluciones analizadas el llamado del artículo 24 de la Ley de Violencia Familiar en la que se basaría la denuncia por resistencia o desobediencia a la autoridad,

De esta última apreciación se puede notar un aspecto aún más importante, según la fecha de las resoluciones que se observan, éstas son dictadas antes de la incorporación del párrafo que incluye a las medidas de protección en el artículo 368 del Código Penal, lo que significa la preexistencia de una norma que ya identifica esta acción como un delito.

La explicación que corresponde a lo indicado se orienta hacia la competencia que le corresponde a cada cuerpo legal, así la Ley 30364, recogerá las directrices que se ocupen del aspecto sancionatorio penal puesto que se trata de una Ley especial que agrupa reglas aplicables en el área civil familia así como el área penal; por todo ello el artículo 24 ya mencionado constituirá la directriz para que el cuerpo legal pertinente se encargue de la sanción que a todas luces no contempla este artículo.

5.1.3. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

Tabla 3: Resultado de la pregunta N° 1 del cuestionario de encuesta aplicado a 50 operadores jurídicos.

1. ¿Qué entiende usted por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad?	
a. Incumplimiento de criterios de autoridad.	13
b. Desacato de una regla.	1
c. Incumplimiento a una orden impartida por autoridad.	30
d. Falta de respeto a las órdenes establecidas para el control de la seguridad.	6
TOTAL	50

Ilustración 2: Gráfico de la Tabla N° 3

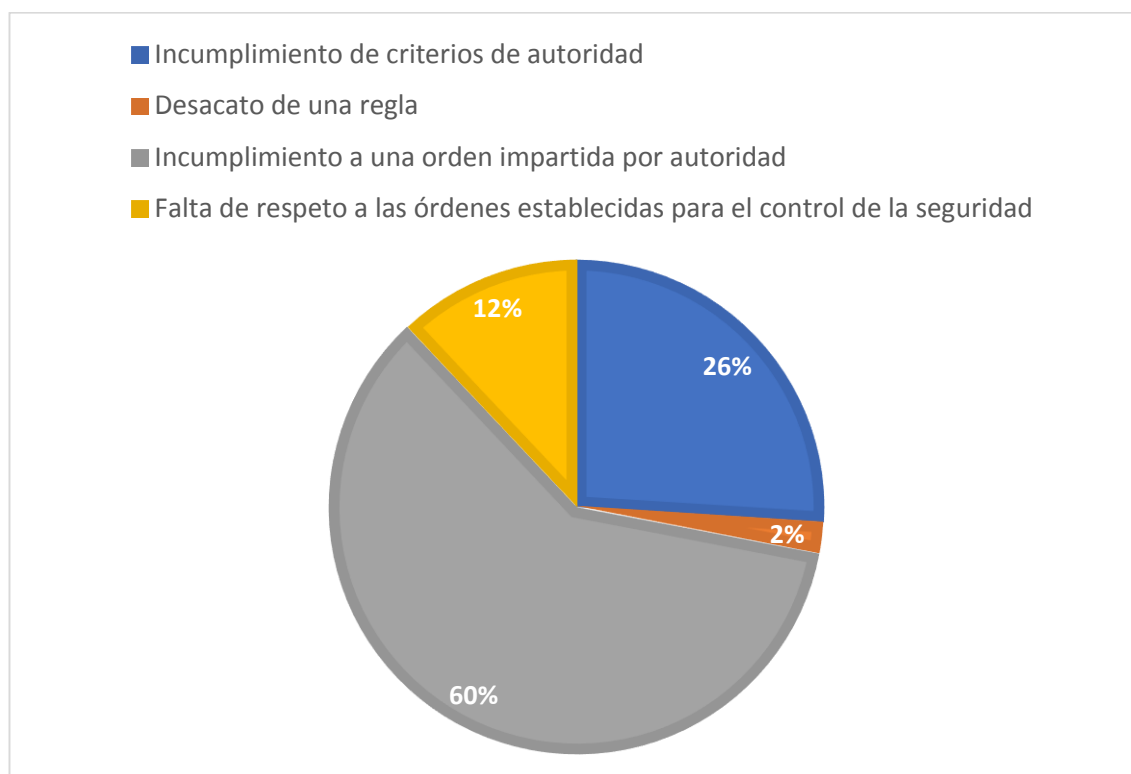


Tabla 4: Resultado de la pregunta N° 2 del cuestionario de encuesta aplicado a 50 operadores jurídicos.

2. ¿Se puede decir que las medidas de protección son órdenes impuestas por los jueces?	
a. Si	47
b. No	1
c. No sabe	2
TOTAL	50

Ilustración 3: Gráfico de la Tabla N° 4

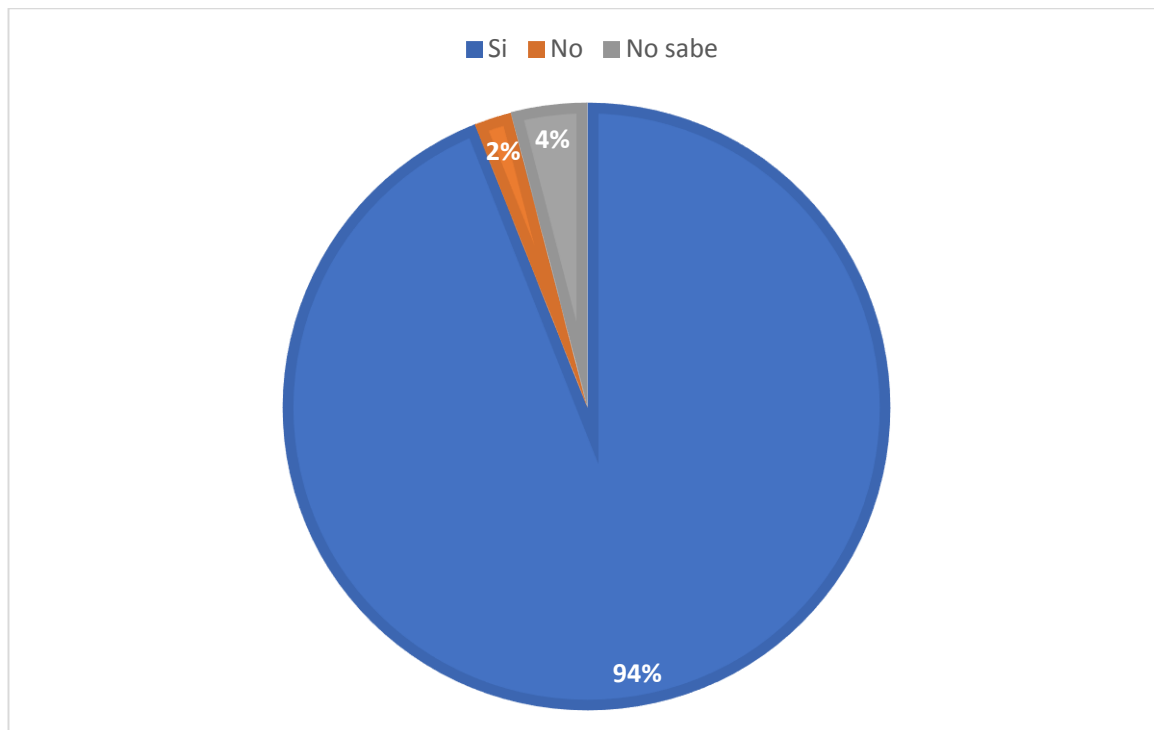


Tabla 5: Resultado de la pregunta N° 3 del cuestionario de encuesta aplicado a 50 operadores jurídicos.

3. ¿Considera usted que la construcción del tipo penal de desobediencia y resistencia a la autoridad debe incluir el verbo rector incumplir, para referirse a las medidas de protección en violencia familiar?	
a. Sí, porque se equipara a los otros dos verbos rectores.	27
b. No, porque es otro tipo de acción.	1
c. Tal vez, porque el incumplimiento representa desobediencia.	16
d. No, porque el incumplimiento representa ausencia de ejercicio del deber, mientras que los otros dos verbos implica ausencia de respeto a la autoridad.	6
TOTAL	50

Ilustración 4: Gráfico de la Tabla N° 5.

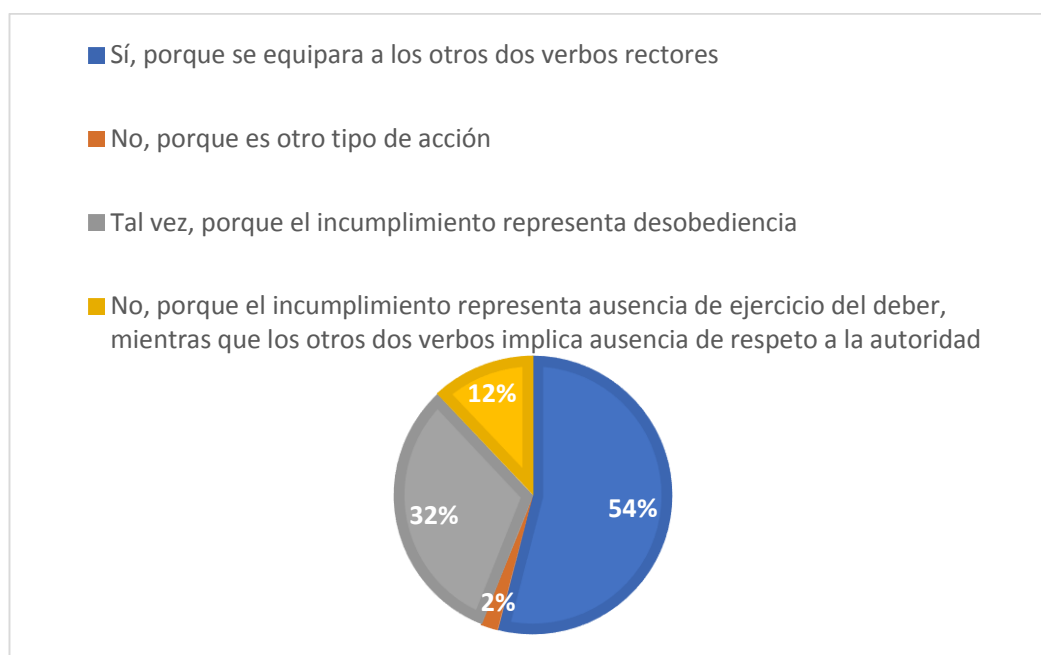


Tabla 6: Resultado de la pregunta N° 4 del cuestionario de encuesta aplicado a 50 operadores jurídicos.

4. ¿Existirá justificación para el reproche penal del incumplimiento de las medidas de protección en los procesos de violencia familiar?	
a. Si	47
b. No	3
TOTAL	50

Ilustración 5: Gráfico de la Tabla N° 6.

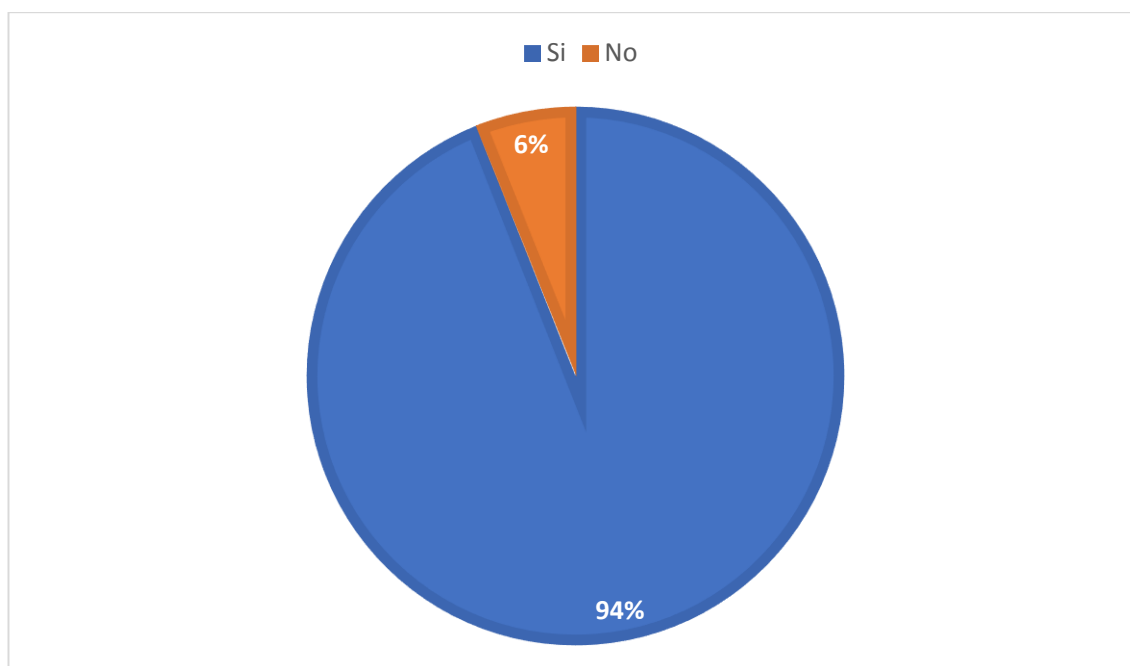


Tabla 7: Resultado de la pregunta N° 5 del cuestionario de encuesta aplicado a 50 operadores jurídicos.

5. ¿El incumplimiento de las medidas de protección atentan contra el carácter previsorio de la ley de violencia familiar?	
a. Si	13
b. No	6
c. El problema de la previsión de la violencia familiar no depende del incumplimiento aludido, sino de la estructura de la misma Ley.	31
TOTAL	50

Ilustración 6: Gráfico de la Tabla N° 7.

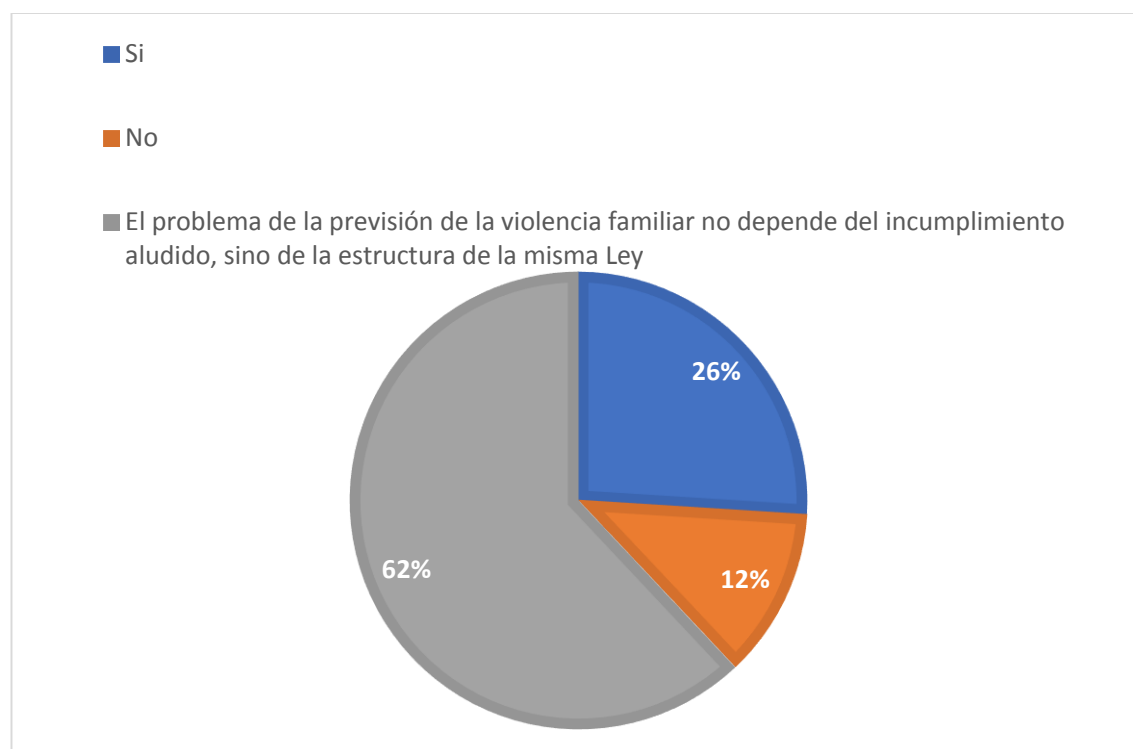
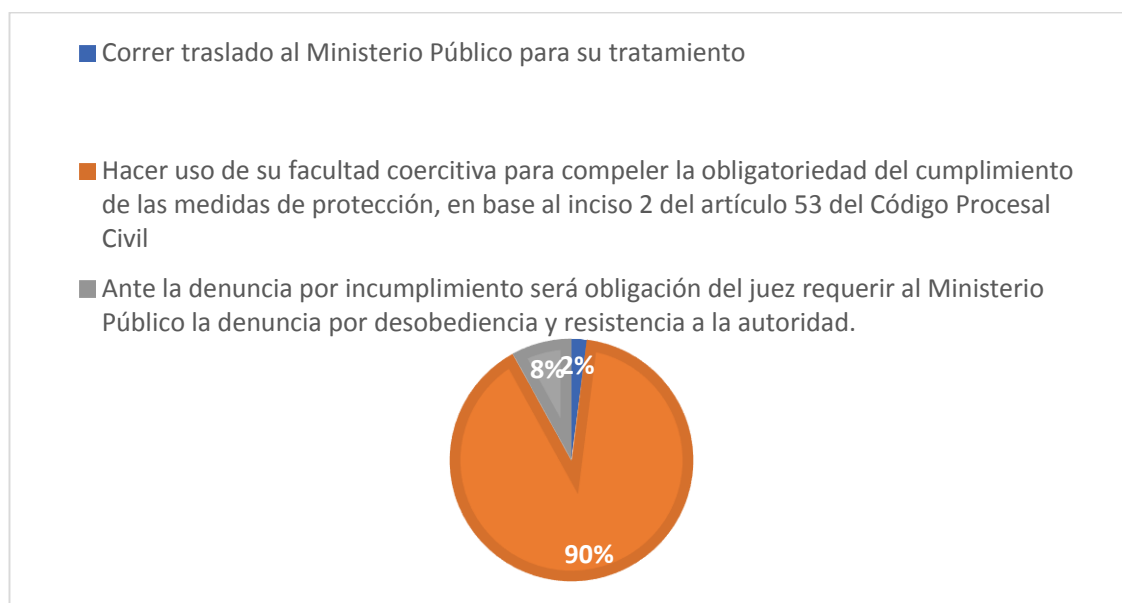


Tabla 8: Resultado de la pregunta N° 6 del cuestionario de encuesta aplicado a 50 operadores jurídicos.

6. Respecto al incumplimiento de las medidas de protección por violencia familiar ¿Cuál debe ser la medida que aplique el juzgador?	
a. Correr traslado al Ministerio Público para su tratamiento.	1
b. Hacer uso de su facultad coercitiva para compeler la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de protección, en base al inciso 2 del artículo 53 del Código Procesal Civil.	45
c. Ante la denuncia por incumplimiento será obligación del juez requerir al Ministerio Público la denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad.	4
TOTAL	50

Ilustración 7: Gráfico de la Tabla N° 8



CAPÍTULO VI

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir.

6.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Explicar la justificación jurídica de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar”.

- ✓ ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las medidas de protección?

La respuesta tendrá que enfocarse desde la perspectiva de su función: preventiva. Teniendo en cuenta que el sentido urgente y auto satisfactorio de las medidas de protección, a fin de entender su naturaleza jurídica, sobre lo indicado ha de verificarse su función o finalidad para luego determinar sus efectos.

La cuestión urgente tiene que ver con la probabilidad de una agresión futura de tipo física o psicológica originada en razón de la primera denuncia; luego el aspecto de la auto satisfacción está relacionado con la inmediatez de su otorgamiento, esto es en tanto el operador jurídico toma conocimiento de la afectación y en razón de la posibilidad de una concurrencia inmediata de más agresiones, concederá las medidas en cuestión.

- ✓ ¿El carácter preventivo de las medidas de protección será suficiente justificación para su incorporación en el ordenamiento jurídico?

Jurídicamente se puede entender justificada la incorporación de las medidas de protección al ordenamiento jurídico, con base en el carácter preventivo de tales medidas, luego el problema que se evidencia radicaría más bien en la forma en que se utilizó esta justificación jurídica, la misma que se presume dependerá de una correcta calificación de la urgencia que provocará la inmediata atención garantista.

- ✓ ¿Qué factores determinarán la eficacia de las medidas de protección en el ámbito de la violencia familiar?

Habiendo quedado claro el reconocimiento de una justificación para la existencia jurídica de las medidas de protección y la exigencia del operador jurídico respecto a la adecuada valoración de la urgencia y necesidad, precisamente este último aspecto se constituye en el principal factor que estaría provocando la ineficacia de las medidas de protección respecto a su aplicación en los casos de violencia familiar, puesto que su otorgamiento requiere de un análisis acucioso que permita establecer en función a la realidad de cada caso, el reconocimiento de la urgencia y necesidad de la aplicación de una medida de protección.

- ✓ Insuficiente justificación

Otro factor que estaría provocando la ineficacia de las medidas de protección, se puede identificar en la ineficiencia de la intervención de los operadores jurídicos y la policía nacional para el control del cumplimiento de tales medidas, puesto que se requiere mayor fiscalización de las funciones que la ley ha incorporado para tal fin; pese incluso, a que recientemente se desarrolló una modificación de violencia familiar en la que se incorpora la responsabilidad de los funcionarios que tienen a su cargo aquella labor de velar por el cumplimiento de las medidas de protección.

- ✓ ¿Cuáles son los efectos sociales y jurídicos que desencadenan los factores negativos sobre las medidas de protección?

Si se presume que el derecho tiene por finalidad ejercer el control social, para el caso de la violencia familiar se puede apreciar que las acciones tomadas por el Estado en base a dicha potestad no han surtido los efectos deseados, al punto de que la repercusión en la sociedad resulta negativa, por cuanto los niveles de incidencia de las agresiones va en aumento.

Sin duda alguna la lectura de las cifras antes mencionadas así como producen el efecto social descrito, también constituyen un efecto jurídico que se refleja en la configuración de las leyes que regulan dichos ilícitos, para efectos de verificación basta con observar la última modificación de la ley 30364 que incorpora un párrafo al Código Penal en su artículo 364°, tipificando el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad para el incumplimiento de las medidas de protección en razón de la investigación de violencia familiar.

Es de notar que tanto la presión social cuanto la lectura de los índices, llevan al legislador a sobrepasar innecesariamente los límites que esgrime el Derecho Penal como ciencia, dando como resultado un efecto jurídico negativo.

6.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Analizar el Delito de resistencia o desobediencia a la autoridad”.

- ✓ ¿Cuál sería la definición más acertada respecto al tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad?

Dada la confusión que opera al momento de la determinación o calificación del acto delictivo a fin de imputar el dicho tipo penal, se hace necesario que la legislación se ocupe de tomar la postura más acertada que otorgue la doctrina a fin de que no se confunda los lineamientos que identifiquen a cada una de las acciones por separado.

Dicho efecto deberá reflejarse en la puntualización en el artículo 368 del Código Penal de cuándo es que corresponde cada una de las acciones, es decir si afecta a una determinada orden o la institución que está detrás de la misma.

- ✓ ¿Qué diferencia existirá entre el concepto típico o verbo rector resistencia y el de desobediencia a la autoridad?

Se pueden apreciar dos situaciones diferentes respecto a la resistencia y desobediencia de la autoridad, puesto que la primera estará referida a una respuesta negativa inmediata ante la ejecución directa de las acciones de un funcionario investido de autoridad, caso la Policía Nacional en los actos ejecutivos de una determinada orden; por otro lado se ubica la desobediencia que estaría referida a la omisión voluntaria respecto a la orden impartida a través de un documento resolutorio que incorpora una orden para su estricto cumplimiento, la misma que adquiere su carácter omisivo en tanto tal decisión haya sido de conocimiento del obligado.

- ✓ ¿Cuál verbo rector coincidirá con la acción de incumplir las medidas de protección?

Luego del desarrollo de los verbos rectores del tipo estudiado se puede entender que la aplicación de ellos sobre el incumplimiento de las medidas de protección únicamente debiera operar respecto al de desobediencia, dada la característica del documento que genera la orden

constituyente de medida de protección, salvando el problema de la calificación de dicho acto.

Sobre lo indicado resulta importante también agregar el detalle que opera como ineficacia de la figura jurídica estudiada, así aquella labor del operador jurídico responsable del otorgamiento de las medidas de protección juega un importante papel para lograr la identificación de la responsabilidad del agresor que las incumple.

Este análisis está orientado por la actual estructura del artículo 368 del Código Penal, al mismo que se le ha incorporado las medidas de protección para amparar la garantía del bienestar familiar atacada por su desobediencia o resistencia; sin embargo, pese a lo antes indicado, se considera como una opción el hecho de que debiera tomarse como verbo rector aquel que se refiere a la acción directa del incumplimiento, ello con el fin de evitar confusión al momento de tipificar la acción, en sentido el verbo sugerido sería “incumple”.

6.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Describir doctrinariamente la teoría de la imputación penal y su relación con los principios rectores del derecho penal”.

- ✓ ¿Qué principios del derecho penal limitan la acción de imputar un delito?

En base al concepto de imputación referida al reconocimiento de la responsabilidad sobre un determinado hecho delictivo con el fin de aplicar una sanción establecida en la norma, se realiza el análisis de la acción para determinar si corresponde o no imputar el delito, así el resultado lleva a la idea de que tal calificación supera límites que están establecidos en el Derecho Penal, estos son los principios rectores del mismo, los cuales permiten la ejecución de un Derecho Garantista.

En ese sentido corresponde indicar que el tipo penal analizado en su configuración dirigida a la sanción de acciones que constituyen resistencia o desobediencia de un determinado mandato, aplicada al incumplimiento de las medidas de protección termina por adecuarse a la incorporación por el contenido de la garantía de mínima intervención del Derecho Penal, puesto que se adecua con el subprincipio de subsidiaridad al no existir otras formas de solucionar el conflicto en función a la prevención del daño .

Dada esta apreciación, bien corresponde indicar que la sanción aplicada al incumplimiento de las medidas de protección al ser de ejecución general, desatiende la posibilidad de que existan niveles de afectación al bien jurídico protegido, la correcta administración de justicia, puesto que en función a la naturaleza diversa de las medidas de protección debería existir una gradación que permita establecer una sanción proporcional al posible daño causado.

6.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Determinar si existe la posibilidad de imputar por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, antes de establecerse el delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar a nivel fiscal”.

- ✓ ¿Qué justificación existe para superar el límite del principio de última ratio del derecho penal con el fin de imputar desobediencia a la autoridad por acciones de incumplimiento de las medidas de protección?

Teniendo en cuenta que el principio de ultima ratio del Derecho Penal conduce al control de la aplicación del mismo sólo en casos que revisten la característica de gravedad lesiva, es preciso que respecto a la calificación del incumplimiento de las medidas de protección como un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, se verifique si no supera tal restricción.

Es decir, será necesaria la verificación de la vulneración, perjuicio o daño de un determinado bien jurídico, lo cual permitirá establecer su incorporación la acción de incumplimiento; lo que según la observación de la regla, no se ubica ninguna restricción específica que permita al operador jurídico la negativa a su incorporación debido a que es necesaria para poder reducir a modo de prevención un posible daño por un acto de violencia dentro de un grupo familiar.

- ✓ ¿Qué tan proporcional resultaría la sanción del delito de resistencia y desobediencia a la autoridad por el incumplimiento de las medidas de protección, bajo el parámetro general que proyecta la Ley 30364 y la incorporación del mismo al Código Penal?

Habida cuenta que la Ley 30364 configura una directriz normativa al prescribir en su artículo 24 la calificación del incumplimiento de las medidas de protección bajo el tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad, resulta necesaria la identificación del nivel de lesividad que asume este ordenamiento para alcanzar la sugerencia de este reproche, por lo mismo que habrá de verificarse cuál es el tipo de sanción que opera ante la identificación de la violencia familiar.

Así, la sanción penal por violencia familiar resulta ser de 1 a 3 años y luego ante la existencia de agravantes constituirá una sanción de: 2 a 3 años; estas sanciones tienen como justificación la lesión de un bien jurídico que resulta ser la vida, el cuerpo y la salud (integridad física).

Ahora bien, respecto a la calificación del incumplimiento de las medidas de protección como un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad le corresponderá una sanción de 5 a 8 años de pena.

Luego de la identificación de las sanciones penales se puede verificar

que objetivamente existe un sinsentido apreciado luego de la comparación de las penas impuestas, lo cual hace denotar que existe un carácter desproporcional de las mismas; iniciando la crítica por el hecho de que el bien jurídico vida tendrá sin duda alguna un nivel de protección más amplio que el que protege a la administración de justicia; siendo así, no es coherente sancionar con mayor pena el incumplimiento de una medida de protección que busca asegurar un bien cuya vulneración representa una sanción menor.

- ✓ ¿Qué tan apropiada resulta la restricción de las acciones del fiscal formulada en la ley 30364, respecto a la investigación del delito de violencia familiar desde el conocimiento de la noticia criminal?

Al analizar el tipo penal de Desobediencia y Resistencia a la autoridad, se puede observar en las características de la orden que se desobedece, la especificación de que éstas han de ser otorgadas por un funcionario público, siendo que para el caso de las medidas de protección, será el Juez quien las imparte, y por otro lado que la orden sea legalmente impartida.

Sobre lo último es prudente analizar el contenido del dictado de las órdenes surgiendo el cuestionamiento respecto a si existe un problema de constitución, dado que las medidas de protección otorgadas no especifican puntualmente primero el tipo y grado de la agresión, como fundamento de la medida, y luego la ausencia de características específicas de la prohibición de actos por parte del posible agresor.

Esto último sumado al hecho de que el documento que contiene la medida de protección es uno de carácter jurisdiccional, que incorpora la decisión de un magistrado, por lo mismo que ha de cubrir las características de una resolución, ergo argumentación y motivación adecuada.

En este sentido y con lo anteriormente indicado, resulta inferir que tal decisión al no cubrir las características indicadas, no constituirá una orden legalmente impartida, en razón de las falencias advertidas.

Se tiene entonces un primer punto que desde la partida del otorgamiento de las medidas de protección desdibuja la posibilidad de encajar en el tipo penal del artículo 368 que dentro de su configuración se exige el carácter de orden legalmente impartida.

Al advertir la última modificación del Código Penal respecto a este artículo, en el que se amplía la acción de este tipo penal hacia la desobediencia o resistencia ante una medida de protección, resulta prudente el análisis de su viabilidad, la misma que se iniciará con la transcripción del citado párrafo a continuación.

Art. 368. Resistencia o desobediencia a la autoridad.

Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originario por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años.

Tal cual se aprecia en un primer término, tal pareciera que se ha optado por trasladar la construcción del artículo 24 de la Ley N° 30364, que a la letra dice:

Art. 24 incumplimiento de medidas de protección.

(...)El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso originario por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de desobediencia o resistencia a la autoridad previstos en el Código Penal.

Ello con el fin de ampliar las acciones del tipo penal para garantizar la seguridad de las posibles víctimas de violencia familiar. En ese sentido tendría que analizarse los aspectos de coincidencia entre ambas reglas, dando inicio por el detalle de que el término desobediencia se relaciona con la falta del cumplimiento de una orden, esto es, el artículo 24 de la Ley 30364, estaría redundando al contemplar ambos términos.

Por otro lado, si bien es cierto que la intención de trasladar el contenido del artículo 24 en mención hacia la estructura del tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad, está revestido de un carácter preventivo que se presume adopta tal cualidad de las sanciones penales; sin embargo, deberá tenerse en cuenta además que, la acción penal requiere de la verificación de ciertas circunstancias justificantes para la construcción de un tipo que permita sancionar ciertas acciones en razón de la lesión que producen a un determinado bien jurídico protegido.

Para el caso de las medidas de protección, tal como se ha dicho antes, adolecen de un problema de contenido lo cual debilita la identificación de la forma en que se ha de producir la puesta en peligro del bien jurídico y por lo mismo que no tendrán la característica de orden legalmente impartida; luego esta cualidad se adhiere a la generalidad de su aplicación, esto es que sin importar el nivel de la presunta lesión serán impuestas indiscriminadamente, lo cual según se advierte viene provocando el excesivo incremento de los procesos sobre violencia familiar.

Esta peculiaridad permite denotar que la acción penal se aplicará ante hechos que resulta necesario controlar por su gravedad, así como sobre actos que ni siquiera pueden catalogarse como lesivos. Esto último estaría colisionando con el principio de proporcionalidad del Derecho Penal, sin duda alguna identificándose como la sobre criminalización de la violencia

familiar.

Es claro que la construcción del tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad protege el bien jurídico administración pública, siendo que el tipo base sanciona con una pena entre 3 y 6 años. La incorporación del incumplimiento de las medidas de protección por violencia familiar se justificaría por el hecho de constituir una agravante del tipo penal; sin embargo, resulta necesario identificar la cualidad gravosa de esta nueva acción para que sea viable la sanción entre 5 y 8 años, lo que resulta necesario para que establezca la proporcionalidad del incremento respecto del tipo base.

Toda esta descripción permite razonar sobre la idea de que, tal cual se ha construido la incorporación que opera en función del Art. 4 de la Disposición Final de la Ley N°30862, constituye una regla que jurídicamente resulta medianamente viable, puesto que la imputación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad en razón del incumplimiento de las medidas de protección, dada la naturaleza de éstas, pueden causar perjuicios desde inocuos hasta el nivel de graves; por lo mismo que, su ejecución estaría vulnerando principios garantistas del derecho penal, al no existir proporcionalidad en la pena a falta de una gradación que identifique gravedad, esto es sobre criminaliza innecesariamente la acción.

6.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

6.2.1. Respecto a la Variable independiente: La imputación por desobediencia a la autoridad.

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar cuan efectiva resulta la regla que incorpora la acción de incumplimiento de medidas de protección por violencia familiar, en el tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad; examen que se ha desarrollado desde la arista del bien jurídico que se busca proteger con la configuración de este tipo penal, evidenciándose que efectivamente existe un tipo de vulneración, la misma que se identifica como un nivel bajo de la lesión, esto es que no reviste de gravedad suficiente como para que la acción sea sancionada con una pena tan alta como la establece el tipo de resistencia o desobediencia a la autoridad.

Tratándose de la verificación del daño sobre los bienes jurídicos se ha podido reconocer una colisión con el principio de lesividad al desarrollarlo en función a otro principio el cual es el principio de proporcionalidad, puesto que se ha evidenciado que la acción incorporada al tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad, debería reconsiderarse a fin de separar en función a la gravedad del perjuicio causado por la acción, para que la aplicación de la pena sea proporcional; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La imputación por desobediencia a la autoridad, requiere de verificar el nivel de lesión contra el bien jurídico correcta administración de justicia.

6.2.2. Respecto a la Variable dependiente: El incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado en la validación anterior queda determinado que resulta viable imputar por delito de resistencia o desobediencia a la autoridad a la acción del incumplimiento de las medidas de protección por violencia familiar, lo cual traído a este nivel de validación permite reconocer como apropiada tal aseveración en el sentido de que según el análisis de la realidad se observa un problema de eficacia de la regla; ello percibido en razón del incremento del nivel de violencia familiar, lo cual hace presumir que no se está cumpliendo con la finalidad preventiva que se presume de tal acomodo legislativo; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

Pese a que resulta viable la acción penal incorporada para sancionar el incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar, se identifica como ineficaz por lo que no se está alcanzando la previsión esperada.

6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

La imputación por desobediencia a la autoridad, requiere de verificar el nivel de lesión contra el bien jurídico correcta administración de justicia, por lo mismo que pese a que resulta viable la acción penal incorporada para sancionar el incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar, se identifica como ineficaz por lo que no se está alcanzando la previsión esperada

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
Si, resulta viable la imputación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad a nivel fiscal ante el incumplimiento de las medidas de protección; entonces, se estará logrando el fin de previsión de las agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.	La imputación por desobediencia a la autoridad, requiere de verificar el nivel de lesión contra el bien jurídico correcta administración de justicia, por lo mismo que pese a que resulta viable la acción penal incorporada para sancionar el incumplimiento de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar, se identifica como ineficaz por lo que no se está alcanzando la previsión esperada.

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva confirma el planteamiento inicial, dando por sentado que la imputación por la incorporación del incumplimiento de las medidas de protección en el tipo penal de resistencia o desobediencia a la autoridad, resulta viable, pero que la tarea de previsión de la violencia familiar no tiene el carácter de eficaz.

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se puede concluir respecto a la justificación jurídica de las medidas de protección en previsión del delito de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar, que resultan ser acciones tomadas por el Estado en razón a las políticas públicas establecidas para favorecer a los sectores más vulnerables de la población, con el fin de garantizar su bienestar, lamentablemente las cifras que arroja el análisis de la realidad indica que aún no se ha alcanzado el grado de efectividad esperado a nivel de prevención.

SEGUNDA

Del análisis del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, se puede establecer como conclusión el hecho de que se trata de un tipo penal creado con la finalidad de garantizar la protección del bien jurídico correcta administración de justicia, basado en el principio de autoridad.

TERCERO

En razón de la descripción doctrinaria de la teoría de la imputación penal y su relación con los principios rectores del derecho penal, se puede concluir que respecto del tipo penal evaluado de resistencia o desobediencia a la autoridad se puede tomar como fundamento para determinar la necesidad de generar el parámetro típico para conseguir que la imputación de la acción de incumplimiento de las medidas de protección, provoque una sanción penal.

CUARTO:

La posibilidad de imputar el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, es viable en cuanto a la incorporación de los términos “incumplimiento de medidas de protección” en el tipo penal, pero la sanción penal incorporada no resulta proporcional, ello en base a la relación existente entre el principio de lesividad y el principio de proporcionalidad, en el sentido que hace falta que la lesión sea lo suficientemente grave para que se justifique un incremento de la pena, siendo del caso su adecuación a la pena establecida en el tipo base.

RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Se establece como primera recomendación, la revisión legislativa de la reciente incorporación de la acción de incumplimiento de la medida protección en violencia familiar, a fin de recomponer el artículo 368 del Código Penal bajo el parámetro que determina la viabilidad de la imputación por este delito, para que se delimiten los niveles de gravedad del perjuicio, en base a la relación existente entre el principio de lesividad y principio de proporcionalidad ocupa el razonamiento de que hace falta que la lesión sea lo suficientemente grave para que se justifique el incremento de la sanción penal del tipo base.

SEGUNDA:

En función al razonamiento establecido sobre la necesidad de recomponer la estructura del tipo estudiado a fin de alcanzar una adecuada imputación del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad para la acción de incumplimiento de las medidas de protección se sugiere que la tal acción sea efectuada de la siguiente manera:

TIPO PENAL ACTUAL:

Art. 368.- El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones salvo que se trate de la misma detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 años y no mayor de 8 años. (...).

TIPO PENAL MODIFICADO:

Art. 368.- El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención; o el que incumpla una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. (...).

Bibliografía

- Abanto Vásquez, M. (2003). *Los Delitos Contra la Administración Pública*. Lima: palestra.
- Diccionarios: De la Lengua Española. (2012). *Diccionario Básico de la Lengua Española*. España: Larousse.
- Gómez A, E. (1954). *Tratado de derecho penal*. Buenos Aires: Ediar.
- Rojas Vargas, F. (2007). *Delitos Contra la Administración Pública*. Lima: Grijley.
- Ávila Herrera, J. (2004). *El Derecho al Debido Proceso Penal en un Estado de Derecho*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fundada en 1551. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Unidad de Post Grado.
- Ayvar Roldan, C. (2007). *Violencia Familiar. Interés de todos. Doctrina*. Lima: Adrus.
- Barrientos, P. (2015). Desobediencia a la Autoridad: Tipicidad, Dano y Nexos de Causalidad. *Paper de Investigación*, 2.
- Binder. (2005).
- Bramont-Arias Torres, L. M. (2002). *Manual de Derecho Penal. Parte General* (Segunda ed.). Lima: Editorial y Distribuidora de Libros S.A- EDDILI.
- Bustos Ramirez, J. (1989). *Manual de Derecho Penal. Parte General*. Barcelona: ARIEL S.A.
- Camones Gonzales, A. V. (2016). *Eficacia De La Sanción Por Incumplimiento De Las Medidas De Protección Dictadas En Las Sentencias De Violencia Familiar En La Sede Judicial De Lima- Norte, 2016*. Huánuco: Universidad de Huánuco.
- Caso Henry Eduardo Castro Paniagua contra la Corte Superior de Justicia de Junín, Exp. 0426-2003- AA-TC (Tribunal Constitucional 24 de Marzo de 2003). Obtenido de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00426-2003-AA.html>
- CASTILLO APARICIO, J. (2014). *“EL DELITO DE FEMINICIDIO: Análisis Doctrinal y Comentarios a la Ley N° 30068”*. Lima : Ediciones Normas Jurídicas SAC.
- Castillo Aparicio, J. E. (2015). *Las medidas cautelares personales en la violencia familiar* (Primera ed.). Lima: Ubi Lex Asesores SAC.
- Cegarra Sánchez, J. (2004). *Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica*. Madrid: Díaz de Santos.
- Chanamé Orbe, R. (2009). *Comentarios a la Constitución* (4° ed.). Lima, Peru: JURISTA EDITORES E.I.R.L. Recuperado el 04 de 04 de 2018
- Constitución Política del Perú (CP). (29 de Diciembre de 1993). Del Estado y la Nación. Art. 44. *Constitución Política del Perú*. Lima, Lima, Perú: Ediciones y Distribuciones M.A.S.
- CORSI, J. (2004). *Un acercamiento a su expresión en violencia*. Lima: Opción.
- DEFENSORIA DEL PUEBLO. DP. (2017). *La Ley 30364, La administración de Justicia y la visión de las víctimas*. Lima: Defensoría del Pueblo. Obtenido de <https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Informe-de-Adjuntia-N-063-2017-DP-ADM.pdf>
- Díaz Pomé, A. (13 de Junio de 2009). *REVISTA ELECTRONICA DEL TRABAJADOR JUDICIAL*. Obtenido de LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR: <https://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-efectividad-de-las-medidas-de-proteccion-frente-a-la-violencia-familiar/>
- Díez Ripollés, J. L. (2003). *La racionalidad de las leyes penales*. Madrid: Editorial Trotta.
- En José Antonio Caro John, N° 3297-98 (sala penal 06 de agosto de 1999).
- Fernández Sessarego, C. (2015). *Derecho a la identidad personal* (2° ed.). Lima: Instituto Pacífico. Recuperado el 12 de 04 de 2018
- Frisancho Aparicio, M. (2011). *Delitos Contra la Administración Pública*. Lima: Fecat.
- García Navarro, E. (2009). *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*. Lima: Juristas Editores.
- García Toma, V. (2013). *Los Derechos Fundamentales* (2° ed.). Peru: Editorial Adrus S.R.L. Recuperado el 27 de 03 de 2018
- Garrido Montt, M. (2001). *DERECHO PENAL- PARTE GENERAL* (Vol. TOMO I). SANTIAGO-CHILE: EDITORIAL JURIDICA DE CHILE.
- Guerra Cerrón, J. M. (2006). *Sistema de Protección Cautelar. El carácter transversal de la tutela cautelar peruana y su aplicación en los ámbitos del derecho procesal civil, comercial*

- constitucional, consumidor, arbitral, contencioso administrativo y surpanacional*. Lima: Instituto Pacífico.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. D. (2010). *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN*. México: Mac - Graw - HILL/ INTERAMERICANA EDITORES.
- Huerta Guerrero, L. A. (2013). El derecho a la Igualdad. *El pensamiento constitucional*(11), 307-334. Recuperado el 26 de febrero de 2018, de <file:///C:/Users/Acer/Desktop/Downloads/7686-30153-1-PB.pdf>
- Humanos, C. A., & Pacto de San Jose. (1978). Obtenido de https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
- Hurtado Reyes, M. (2006). *Tutela Jurisdiccional Diferenciada*. Lima: Palestra .
- Jescheck, H., & Weigend, T. (2002). *Tratado del Derecho Penal. Parte General*. Madrid: Comares.
- Juárez Muñoz, C. (2017). Análisis del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad en la legislación peruana. *Lex*, 231-278.
- Jurisprudencia Penal, Ex. N° 290-85 (Corte Suprema de Lima 21 de Febrero de 1987).
- Landa Arroyo, C. (2012). *El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos* (Primera Edición ed., Vol. 1). Lima, Lima, Perú: Academia de la Magistratura.
- Landa Arroyo, C. (2015). La Constitucionalización Del Derecho Procesal Penal: El Nuevo Código Procesal Penal Peruano En Perspectiva. *Themis*(68), 181-191. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/15592/16041>
- Laurenzo Copello, P. (2017). La tutela específica de las mujeres en el sistema penal: una decisión controvertida. En J. Hurtado Pozo , *Género y Derecho Penal* (págs. 79-104). Lima: Instituto Pacífico.
- Ley N° 30364. (23 de Noviembre de 2015). Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. *Normas Legales*, 567008-567019. Lima, Lima, Perú: El Peruano. Recuperado el 16 de Marzo de 2018, de <http://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-ley-n-30364-1314999-1>
- Marín Castán , M. L. (2007). La dignidad humana, los derechos humanos y los derechos Constitucionales. *Bioética y derecho*(9), 8. Recuperado el 15 de 04 de 2018, de http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD9_ArtMarin.pdf
- Monroy Rodríguez, Á. A. (2013). Principio de Mínima intervención ¿Retórica o realidad? *Derecho y realidad*(21), 25-31. Obtenido de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/download/4827/3922/.
- Muñoz Conde, F., & García Aran, M. (2002). *Derecho Penal. Parte General*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Pariasca Martínez, J. (2016). *Violencia familiar y responsabilidad civil ¿tema ausente en la nueva Ley N°30364?* Lima: Lex y Iuris.
- Pico I Junoy, J. (2010). *De las Medidas Cautelares a las Medidas Auto Satisfactorias ¿Un Avance del Derecho Procesal?* Lima: Themis.
- Reátegui Sánchez, J. (2016). *Tratado de Derecho Penal. Parte Especial* (Primera ed., Vol. II). Lima: Ediciones Legales S.R.L.
- Rojas Vargas, F. (1991). *Delitos contra la administración pública*. Lima: Grijley.
- Roxin, C. (2017). *La Teoría del Delito en la Discusión Actual*. Lima: Grijley.
- Salinas Siccha, R. (2009). *Delito Contra la Administración Pública*. Lima: Grijley - iustitia.
- Salinas Siccha, R. (2014). *Delitos contra la administración pública*. Lima: Grijley.
- San Martín Castro, C. (2003). *Derecho Procesal Penal*. Lima: Grijley.
- Texo Denes, A. (enero - junio de 2017). ignorancia y opacidad: una mirada al derecho penal. *Revista de la Facultad de Derecho*(42), 281-314. Obtenido de <https://revista.fder.edu.uy/index.php/rfd/article/view/571/903>

- Ticona Póstigo, V. (2007). El Debido Proceso y las lineas cardinales para un modelo procesal en el Estado Constitucional de Derecho. *Revista Oficial del Poder Judicial*(1-2), 175.
Recuperado el 26 de Agosto de 2017
- Toledo Vásquez, P. (2014). *Femicidio/ Feminicidio*. Buenos Aires: Didot.
- Trazegnies Granda, F. (2001). *La Responsabilidad Extracontractual*. Lima: Pontifica Universidad Catolica del Perú.
- Villavicencio Terrenos, F. (2006). *Derecho Penal Parte General*. Lima: Grijley E.I.R.L.
- Villavicencio Terreros, F. (2006). *Derecho penal parte general* (Primera ed.). Lima: Editora jurídica Grijley E.I.R.L. Recuperado el 19 de marzo de 2018